

MAYRA GÓNGORA (1945). Lic. en Historia. Investigadora del Departamento de América Latina en el CEA.

Honduras: militarización y estrategia imperialista

El proceso de militarización de la sociedad hondureña constituye un resultado de los planes que los Estados Unidos le asignan a Honduras dentro del actual contexto centroamericano

INTRODUCCIÓN

A partir de 1979 Honduras se convirtió en la base de operaciones de la agresión imperialista norteamericana a Centroamérica. Estratégicamente ubicada en medio de esta región estremecida por la revolución, su territorio es el centro del cual parten los ataques armados contra el gobierno sandinista y el movimiento armado popular salvadoreño. Una cuantiosa ayuda material y técnica proveniente de los Estados Unidos ha convertido al país en uno de los arsenales mejor dotados del continente a los efectos de ser utilizado con fines contrainsurgentes. La total sumisión de los gobernantes y de la clase dominante locales ha puesto al país en función de la defensa de los intereses norteamericanos en la región.

El triste papel histórico de guardia de la contrarrevolución —recordemos que de territorio hondureño partieron los agresores del gobierno democrático de la Guatemala de Arbenz en 1954, de Playa Girón en 1961 y de República Dominicana en 1965— se ha visto reforzado en la actualidad con la conversión del país en una gigantesca base militar norteamericana.

El presente ensayo tiene como propósito fundamental brindar una panorámica de la situación por la que atraviesa la actual sociedad hondureña y, al mismo tiempo, tratar de presentar los factores que han contribuido a su dependencia. Este hecho no es novedoso ni característico de la etapa actual. Sin embargo, la dimensión que asume en este período y el contexto regional en que se desarrolla determinan su específica connotación histórica.

Muchas interrogantes se abren ante la evidencia del papel que desempeña Honduras en la estrategia político-militar norteamericana. Para poder responderlas, se hace necesario remontarnos a algunos de los antecedentes y características histórico-concretas de la penetración imperialista.

La nota más relevante de la historia hondureña de finales del siglo pasado viene dada por el hecho de que el capital norteamericano fue el que organizó la economía de la exportación. Mientras que en los restantes países centroamericanos se conformó una oligarquía terrateniente criolla que controlaba esa actividad —fundamentalmente en torno a la producción

cafetalera que los insertó definitivamente en el mercado capitalista internacional—, Honduras careció de un grupo empresarial nacional que estructurara su economía en torno a alguna rama productiva con destino a la exportación.

País rico en minerales, durante la colonia fue centro de la actividad de las minas reales. A partir de la década de los 80 del siglo XIX se otorgaron concesiones a compañías norteamericanas, inglesas y nacionales. En este período, asociados al capital norteamericano, los propietarios de la mina “El Rosario” organizaron la *Rosario Mining Company*. Esta compañía, la principal hasta la actualidad, se apoderó de las más importantes concesiones y llegó a controlar el 90% de la exportación del mineral, equivalente al 45% del total de las exportaciones del país. Fue precisamente a través de esa actividad, controlada por empresarios extranjeros, que Honduras se vinculó por primera vez al mercado capitalista mundial.

A pesar del peso fundamental que tenía en la economía del país, la minería dejó muy pocos beneficios. Los ingresos derivados de esa actividad económica no iban a parar a los fondos estatales, sino a bolsillos extranjeros. Al mismo tiempo, el entreguismo de los gobiernos determinó que se otorgaran extremas facilidades a los concesionarios, en detrimento de los intereses nacionales.

Hacia finales del siglo la minería comenzó a ser desplazada por el cultivo del banano, que también quedó bajo el control de compañías estadounidenses. Esta penetración de los capitales ocurría en un momento de expansión del capitalismo norteamericano, que exploraba nuevos campos de acción en su área continental inmediata en busca de materias primas y de alimentos que contribuyera a sostener su desarrollo industrial. En el caso de Honduras ésta penetración se vio facilitada por la actividad entreguista de la clase dominante, cuyos representantes fueron literalmente comprados por la compañía.

En su evolución la producción bananera hondureña presenta tres etapas bien definidas. La primera, que se prolonga hasta los inicios del siglo XX, corresponde al período en que el cultivo se encontraba en manos de pequeños agricultores criollos que vendían el fruto a los comerciantes norteamericanos que arribaban a las costas en embarcaciones de menor calado. La segunda rompe cuando esos comerciantes dejan de ser simples traficantes para convertirse en propietarios e iniciar así el establecimiento de las grandes plantaciones. Desde ese punto de vista histórico este momento resulta crucial: marca la desaparición del sector que pudo haberse convertido en la burguesía bananera hondureña. El mismo será desplazado del panorama económico nacional por el capital norteamericano.

A partir de la primera década de nuestro siglo toda la producción bananera quedó en manos de tres compañías norteamericanas entre las cuales se encontraba la United Fruit Company (UFCO). La compañía inicia sus operaciones oficialmente en 1912, disputándole el monopolio a los dos restantes (Vaccaro y Cuyamel Fruit Ca.), sobre las cuales impuso a la larga su dominio. Se puede afirmar que gran parte de la riqueza de esta compañía se realizó sobre suelo hondureño. Al iniciar sus operaciones contaba con 6 000 acres de tierras; doce años más tarde, en 1924, poseía 400 000 acres de las mejores tierras del país, de los cuales tenía en producción solamente la quinta parte; es decir, 87 000 acres.

Hacia el último quinquenio del siglo XIX el banano se había convertido en el producto que representaba un cuarto del total de exportaciones del país. En 1902 constituía el 52,3% del valor total de las exportaciones. Once años más tarde, en 1923, Honduras era ya el primer exportador de bananos a nivel mundial, con una producción de 28 millones de racimos, de los cuales 20 millones —esto es, alrededor del 70%— procedía de las tierras de la UFCO. Las compañías bananeras y mineras controlaban en el primer cuarto de este siglo la casi totalidad de las exportaciones de Honduras. De hecho las primeras tenían en sus manos la economía del país. Las enormes extensiones de tierras y otras facilidades que les fueron concedidas —que iban desde la utilización de maderas, materiales de construcción, agua y terrenos gratuitamente para sus instalaciones, hasta la exención de impuestos— se hicieron extensivas a las compañías ferrocarrileras que florecieron al amparo de la explotación del banano. Esta situación se vio agravada por la venta que hicieron de sus terrenos a las compañías los productores nacionales compelidos por la imposibilidad de competir con aquellas.

En 1912 en Honduras se ubicaba la cuarta parte del total de inversiones norteamericanas en Centroamérica, incluida Panamá. A fines de los años 20 estas superaban el 30% del total.

La tercera etapa de la producción bananera en Honduras se inició en 1929, cuando la UFCO logró la hegemonía al absorber a su principal competidor, la *Cuyamel Fruit Co.* En ese momento ocupaba el primer lugar de la producción mundial. Esta posición en el mercado internacional se mantuvo a lo largo del siglo hasta la actualidad, en que ocupa el cuarto lugar.

Desde los inicios de los años 20 las compañías extranjeras tienen en sus manos el control total del transporte ferroviario, incluyendo el ferrocarril nacional, las fábricas fundamentales, los ingenios azucareros y las plantaciones; controlaban la electricidad y las comunicaciones en las localidades donde estaban ubicadas y poseían un banco; dominaban e incluso eran propietarias de muelles y embarcaciones para el transporte de la fruta.

Este papel preponderante que asumió el enclave desde el punto de vista económico fue operando la instauración de una dependencia total merced a la cual los norteamericanos se convirtieron en los reales dueños del país. Toda actividad de importancia existente o por desarrollar —agricultura, comercio, banco, comunicaciones, electricidad—, quedó bajo el control de sus compañías.

La tercera opción de que pudo haber dispuesto esta burguesía para la acumulación, el comercio, tampoco fue aprovechada. Una fuerte oleada de inmigración árabe que llegó al país a partir de 1915 lo fue ocupando.

La crisis mundial del capitalismo en 1929 se manifestó en Honduras, entre otros factores, en la reducción de las inversiones norteamericanas en un 50%, según se muestra en la Tabla No. 1. Esto incidió negativamente en la producción bananera, que se vio afectada además por las plagas naturales. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una reactivación del poderío económico norteamericano, que en el caso específico de Honduras significó una revitalización del enclave bananero y minero. A partir de esta fecha comienza a producirse un lento desplazamiento de las inversiones extranjeras hacia la industria manufacturera. De nuevo la clase dominante dejó vía libre al capital foráneo, que se situó a la cabeza de la industrialización del país. No obstante, se observa al mismo tiempo un desarrollo de capitales nacionales y centroamericanos que dan lugar a un fortalecimiento relativo del sector burgués-oligárquico.

En lo agrario tiene lugar cierta diversificación productiva que se expresa en la introducción de nuevos cultivos o en la ampliación de otras producciones ya existentes —palma africana, cacao, algodón, caña, café, ganadería. El Estado inició su participación en las actividades de los productores nacionales concediendo créditos y realizando inversiones de infraestructura para la reproducción. Se inició una política de explotación de las tierras improductivas. El relativo auge que tuvo lugar en el campo trajo como consecuencia la proletarización de muchos campesinos o su integración más efectiva al mercado; al mismo tiempo, se produjo la incorporación de nuevas tecnologías por parte de los productores y la ampliación del mercado interno. En ello influyó además la mercantilización de la economía, favorecida entre otros aspectos por el proceso de urbanización.

De carácter fundamentalmente artesanal, la manufactura experimentó un sostenido crecimiento que se manifestó en el hecho de que en 1945 representaba un 7,4% del PIB y hacia 1960 alcanzó el 15%. Medido en términos de valor absoluto, este crecimiento representó un 264,5%.

El Mercado Común Centroamericano (MCCA), desarrollado a partir de la década del 60, en general no representó cambios sustanciales para la economía

hondureña. No obstante, tuvo lugar un proceso de concentración industrial, estrechamente ligado al capital norteamericano. De las 50 empresas más importantes del país, 39% tenían participación del capital norteamericano; en 27 de ellas controladas más del 50%; en 7 controladas entre el 25 y 49% y en las restantes el 10 y el 24%. Al mismo tiempo tenía el control del 100% en la producción de las 5 mayores y el 88,9% de las diez mayores empresas hondureñas.

Si bien el MCCA contribuyó aparentemente al desarrollo del sector capitalista nacional, la estructura de lo que estaba concebido incrementó la penetración del capital extranjero. Las industrias no fueron de sustitución de importaciones. Por el contrario, trabajaban con maquinarias, equipos y materias importadas, lo que determinó que la tasa anual del crecimiento de este rubro aumentara con mayor rapidez que la propia producción, en lugar de disminuir. Por lo general se trataba de industrias de las llamadas “de toque final”, que en realidad aportaron poco al desarrollo del país. Además, al control ya existente del capital foráneo sobre la agricultura, los minerales, el transporte, la electricidad, y las comunicaciones, se sumó al de las nuevas industrias.

En el marco de los países integrados en el MCCA — Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica—, Honduras siguió siendo el de mayor subdesarrollo y se convirtió en el suministrador de granos y alimentos a su vecino inmediato, El Salvador, del cual recibía, en cambio productos manufacturados. Se estableció así entre los dos países una relación similar en muchos sentidos a la existente entre países pobres y ricos. Esta fue una de las razones que contribuyó a desencadenar el conflicto bélico de 1969.

Hasta 1970 se mantuvo el proceso de relativo auge económico, en el que se observó un crecimiento promedio sostenido del PBI de 4,2% anual, con períodos de lo que fue mayor, como entre 1960-65, en que se registró un 5,2% anual. Igualmente, el PBI per cápita se incrementó de 234 a 439 dólares. Entre 1975-78, durante el gobierno Melgar Castro, el crecimiento se aceleró, entre otros factores, debido al apoyo financiero internacional e internamente al del sector empresarial. Durante esta etapa se implementaron planes de explotación forestal y un proyecto hidroeléctrico, así como planeas de colonización sustitutivos de una prometida reforma agraria que ningún gobierno ha desarrollado a plenitud en el país. Se fomentaron también actividades industriales y de servicios.

A despecho del relativo bienestar económico que arrojan las estadísticas hondureñas a partir de la década de los años 50, durante toda la etapa se mantuvieron las tendencias críticas que aflojarían años más tardes. El déficit de la balanza comercial y de servicios creció de 10 143 millones entre 1960

1979; el gasto público creció en once veces a un ritmo anual de 14,2 y pasó de 40 a 498 millones; el déficit fiscal se incrementó 60 veces a un ritmo anual de 24,2%, avanzando de 1,8 millones a 110. En 1979 el déficit representaba un 35% del gasto público.

La deuda externa creció aceleradamente a un ritmo del 25% anual, para pasar de 14 millones en 1960 a 1 107 en 1979. Solamente entre 1973 y 1979 el crecimiento fue de 937 millones, por los cuales se pagaron 214 millones de dólares en intereses. Se observó igualmente un aumento del peso del servicio de la deuda sobre las exportaciones, que en 1960 era de 2,6% y en 1979 llegó a ser del 22,6%.

Las inversiones extranjeras fueron de 40,4 millones entre 1960 y 1969, Y aumentaron a 74,2 millones en el período 1970-79. Entre 1974 y 1979 ingresaron 61 millones de dólares por los cuales se pagó 199 millones por utilidades, lo cual equivale a decir que por cada dólar ingresado salieron 3,26 en un proceso que afectó negativamente la disponibilidad de divisas.

Al llegar 1979, año que resultó crucial para Honduras por haber marcado la redefinición de su papel político en el continente, estaban dadas todas las premisas para el desencadenamiento de la actual crisis económica.

EL PROCESO POLÍTICO

El carácter deformado que imprimió el enclave a la sociedad hondureña se manifestó además en la estructura política. Desde su posición de supremacía económica, los empresarios norteamericanos controlaron los hilos de la política nacional en beneficio propio. De manera oculta o abiertamente, financiaron guerras, compraron ministros y funcionarios. Con el estilo de actuación que los caracteriza, impulsaron las carreras públicas de sus abogados y representantes como funcionarios estatales para garantizar mejor sus operaciones. Los sectores dominantes locales, que constituían una clase sumamente débil, quedaron relegados a una posición de servidores o administradores de los intereses imperialistas desde sus posiciones en el aparato burocrático estatal que, junto a las regalías de las compañías, se convirtió en su principal fuente de acumulación, en ausencia de otras propias. Este factor resulta determinante para caracterizar a la clase dominante hondureña, porque su desarrollo e inserción en el mercado capitalista mundial nacen lastrados por una dependencia que impedirá su consolidación.

Transformados en socios menores de las compañías extranjeras que operan en el país, su actuación estuvo condicionada por los intereses de esas compañías y se limitó en gran medida a garantizar el andamiaje que facilitaría la explotación de la mano de obra y de las riquezas naturales por parte del capital extranjero.

En la lucha que a principios de siglo libraron las compañías bananeras por obtener la hegemonía económica, buscaron el apoyo de diversos sectores locales. Políticamente este factor repercutió en la prolongación del período llamado “de anarquía”, que se caracteriza por luchas civiles por el control del poder, y que se prolongó hasta 1933.

Un rápido recorrido por la historia hondureña evidencia que la inestabilidad constituye la nota dominante de su panorama: medio centenar de guerras con los países vecinos, más de 260 guerras civiles, casi 160 gobiernos y más de una docena de constituciones aprobadas, son la mejor muestra de ello. En este escenario tipificado por el desequilibrio, los militares se convirtieron en la fuerza política fundamental. El proceso de profesionalización que los condujo a escalar esta posición se inició en 1954 con la emisión de la Ley que institucionalizó al ejército como organización permanente. Ese mismo año fue firmado el primer Programa de Asistencia Militar con los Estados Unidos. Este hecho se enmarca en la estrategia imperialista que a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a implementar la política llamada “de seguridad nacional” a nivel continental esgrimiendo el fantasma de un hipotético ataque comunista proveniente de la Unión Soviética. No hay que olvidar tampoco que este Programa de Asistencia Militar se acuerda en los momentos en que se lleva a cabo la agresión contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala.

El año 1954 resultó un año trascendental para el desarrollo político hondureño. Marcó el despegue de las fuerzas antagónicas de la sociedad: el ejército y el movimiento obrero. En este año tiene lugar la histórica huelga de los 50 000 obreros bananeros, a la que se sumaron los mineros, tabacaleros, textileros. La legalización de los sindicatos, que hasta ese momento no eran reconocidos, constituyó el logro fundamental del movimiento, que inició una nueva etapa en las luchas populares del país. Antes de la huelga no existía ningún sindicato legal; tres meses después de concluida había ya cincuenta y cinco.

Dos años después de constituido, el nuevo ejército propina su primer golpe de Estado y se mantiene durante diecinueve meses en el poder. Al finalizar su gestión, entregó el mando a los civiles liberales, que lo asumen por primera vez en la historia del país. En 1963 se produjo el segundo golpe. El ejército se mantuvo en el poder hasta 1971, en que se vio obligado a entregarlo como consecuencia de la derrota militar y política sufrida frente a los salvadoreños en la llamada “Guerra del Fútbol” o “Guerra de las Cien Horas”. Durante este enfrentamiento se evidenció la desorganización, corrupción e incompetencia de la institución armada. El poder se le entrega nuevamente a los civiles por un corto período de tiempo que sirvió para que los militares se reorganizaran y propiciaran un nuevo golpe, que esta vez se acompañó de un proyecto político

más sólido, y que marcará una nueva etapa en el papel que desempeñan las fuerzas armadas en esa sociedad. Se lanzó así un programa de reformas de carácter avanzado que abarcó tres aspectos fundamentales: reforma agraria, reforma forestal e industrialización. La reforma agraria, bandera fundamental del plan que se utilizó para garantizar la base de apoyo popular, no afectaba a la clase terrateniente, sino que aspiraba a convertirla en una clase de empresarios agrícolas. Por este medio se buscaba tratar de fortalecer el capitalismo rural y modernizar la agricultura para hacerla competitiva en el mercado centroamericano.

La base financiera prevista para la realización de esta transformación agraria era la reforma forestal. Los grandes bosques, que cubren el 77% del territorio hondureño, eran explotados por 38 aserraderos de los cuales 36 estaban en manos de empresarios extranjeros —fundamentalmente de italianos y norteamericanos. El gobierno militar decretó su nacionalización y el monopolio estatal para la exportación de la madera, pero el Estado siguió autorizando la tala de bosques. De acuerdo al proyecto reformista, ambas medidas permitirían acumular recursos suficientes para iniciar la industrialización nacional.

El ambicioso plan quedaba sin embargo lastrado por debilidades fundamentales que determinaron su rápido eclipse. En primer término, dejaba intacta la estructura agraria y no ofrecía soluciones prácticas a los graves problemas que afectan a la población. En la perspectiva interna, el plan carecía de lineamientos políticos que lo definieran, ya que había sido supuestamente ideado por civiles tecnócratas presuntamente influidos por las ideas del desarrollismo cepalista. Esto determinó que ni dentro del propio ejército, caracterizado por la heterogeneidad de su composición social, existiera un apoyo irrestricto hacia el proyecto.

A partir de 1975 el reformismo entró en un período de estancamiento. Muchos de sus impulsores comenzaban a abandonarlo. En esta coyuntura los norteamericanos pusieron al descubierto un escándalo que resultó el equivalente a un golpe de Estado contra el gobierno reformista encabezado por el general Osvaldo López Arellano. La maniobra consistió en hacer público un soborno de dos millones y medio de dólares que la United Brands pagó a un alto funcionario del gobierno a cambio de la obtención de favores para esa compañía bananera.

El entonces coronel Juan Alberto Melgar Castro se colocó al frente del Estado para revertir el proceso reformista y retornar a las posiciones tradicionales. Melgar Castro permaneció en el poder hasta agosto de 1978, año en que se produce un nuevo golpe y toma las riendas una Junta que marca el viraje más derechista de la contrarreforma. La Junta estaba liderada por un triunvirato

compuesto por el general Policarpo Paz García y por los tenientes coroneles Amílcar Zelaya y Domingo Álvarez Cruz. Se mantuvieron en el poder hasta 1980, año en que la Asamblea Constituyente decidió nombrar presidente provisional a Policarpo Paz, en espera de las elecciones que situaron nuevamente a los civiles al frente del gobierno-

LA SOCIEDAD HONDUREÑA ACTUAL

La sociedad hondureña contemporánea atraviesa uno de sus peores momentos. Las deformaciones estructurales inherentes al modelo de capitalismo subdesarrollado se agravan por la extrema subordinación al imperialismo norteamericano, tanto en el orden económico como político.

A la entrega indiscriminada de las riquezas nacionales a intereses extranjeros viene a unirse la desigual e injusta distribución de la riqueza en esa sociedad profundamente dividida en clases, así como los problemas derivados del carácter fundamentalmente agrario de su economía, que la hacen dependiente en extremo de los vaivenes del mercado capitalista mundial.

Las víctimas fundamentales son las masas populares, cuyas difíciles condiciones de vida se han visto recrudecidas en los últimos años. De los cuatro millones de habitantes con que Honduras cuenta, el 56,7% es tan pobre que ni siquiera es capaz de adquirir la llamada “canasta de alimentos” que contiene los productos mínimos indispensables para satisfacer sus necesidades energéticas. Se considera que el 68,2% de la población vive en la pobreza. La gran mayoría, el 65,5%, se encuentra ubicada en zonas rurales donde las condiciones de vida son aún más difíciles. De ellos se estima que un 69,7% vive en condiciones de extrema pobreza. El 68,2% considerado pobre percibe solamente el 23,8% del ingreso nacional, mientras que los restantes perciben el 76,2% de este ingreso. El 20% más pobre del país percibe el 4,3%, equivalente a 80,7 dólares anuales, mientras que el 10% de las más altas entradas se apodera del 37,6% del ingreso nacional.

Una de las causales de esta pobreza es el desempleo, cuyos índices crecen vertiginosamente —15% en 1979; 21,2% en 1983—. De la población en edad laboral, calculada en un 1 700 000 trabajadores, alrededor de 250 000 se encuentran desocupados y alrededor de 460 000 carecen de un empleo fijo y se consideran en la categoría de subempleados. Si se tiene en cuenta que de cada trabajador dependen 2,5 personas, resulta que más del 60% del total de los habitantes del país carece de entradas regulares para subsistir, lo que coincide con el índice general de pobreza.

Como agravante está la devaluación del salario real, que perdió un 7,7% de su valor en 1983 y que, salvo en la agricultura, es inferior al de 1976, lo cual

indica que el hecho de poseer un trabajo fijo no constituye una salida para la situación de pobreza.

En el campo esta situación se recrudece por el proceso de concentración de los grandes latifundios, que cada vez que se hacen mayores a costa de las pequeñas parcelas de los campesinos dedicados fundamentalmente a cultivos de subsistencia. En 1974 se calculaban en alrededor de 120 000 las familias campesinas sin tierras; diez años más tarde la cifra superaba las 300 000.

Los datos relacionados con la educación resultan igualmente desalentadores: el nivel de analfabetismo alcanza el 41% de la población, aunque entre los pobres, especialmente en las zonas rurales, alcanza un 80%. Ante ello el gobierno, lejos de buscar soluciones, lleva a cabo reducciones del gasto público destinado a este campo, el cual era sólo un 3,5% del PIB.

En lo que respecta a la salud existe un médico por cada 3 120 habitantes y 1,5 camas por cada mil. Al iniciarse la década del 80 solamente el 1,5% del PIB se dedicaba a este sector.

El déficit habitacional es sumamente elevado. Se considera que más del 60% de las familias no disponen de una vivienda adecuada y que el 41% viven hacinados. De las existentes, el 68% carece de agua potable y servicios sanitarios, mientras que el 60% no tiene luz eléctrica.

Este panorama sumariamente expuesto tiende a agravarse debido a que los recortes presupuestarios afectan sobre todo a los servicios de seguridad social. Al mismo tiempo, no se vislumbra la posibilidad de satisfacer las demandas de trabajo para la gran masa de desocupados y subocupados, que amenaza con aumentar en las condiciones de crisis económica.

Ello determina la existencia de una generalizada situación de descontento entre un por ciento mayoritario de la población, que constituye el campo propicio para la polarización de fuerzas que se viene operando en la sociedad hondureña.

GEOPOLÍTICA Y ESTRATEGIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN

La condición ístmica de Centroamérica, y lo que ello implica desde el punto de vista comercial y estratégico, han resultado determinantes en su desarrollo histórico. En este factor encontramos la causa fundamental de que varios poderes imperiales se disputaran su dominio y de que la actividad exterior del imperialismo norteamericano se encaminara, a partir del siglo XIX, a tratar de garantizar su hegemonía sobre lo que consideraron desde temprano como su “traspasio natural”.

La actividad de las compañías norteamericanas y el establecimiento de enclaves bananeros en las repúblicas centroamericanas se convirtieron en un

eficaz vehículo de control sobre la economía y la política hasta muy avanzado el siglo XX. Los Estados Unidos mantuvieron bajo su control a Centroamérica mediante la imposición de gobiernos afines a sus intereses y no vacilaron en intervenir abiertamente en aquellos casos en que estimaron oportuno deshacerse de un vecino que pudiera considerarse “hostil”, como ocurrió en el caso de Guatemala en 1954.

Sin embargo, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la victoria de Playa Girón en 1961 marcaron el inicio de una redefinición de la estrategia imperialista hacia el continente con el objetivo de impedir el surgimiento de “nuevas Cubas”. La primera expresión de este proceso fue la política de “Alianza para el Progreso” (ALPRO), que tuvo dos fines estratégicos fundamentales: aislar política y económicamente a la Revolución Cubana y lanzar un plan de medidas para tratar de frenar la erupción revolucionaria que se oteaba en el horizonte latinoamericano.

Una de las medidas propuestas fue el aumento sustancial de la ayuda económica, acompañado por un esfuerzo de realizar reformas que intentaron modernizar los aparatos represivos con el objetivo de mediatizar los procesos revolucionarios. En Centroamérica esto se tradujo en la fundación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), que no hizo sino imponer una mayor apertura al capital extranjero, sobre todo a las empresas transnacionales estadounidenses. Políticamente el hecho se tradujo en una dependencia aún mayor de las oligarcas locales a los Estados Unidos.

Pero el esperado “milagro estabilizador”, que debía ser el resultado de la política de la ALPRO, se estrelló contra la realidad. En los distintos países el aumento de la alianza del capital privado nacional con el extranjero no hizo más que agudizar las contradicciones sociales internas. El período fue testigo de un fortalecimiento del movimiento popular que en Centroamérica tuvo su mayor expresión en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua (julio 23 de 1961) y en el surgimiento de las guerrillas guatemaltecas.

Para tratar de hacer frente al auge revolucionario el imperialismo incrementa la asistencia militar a los regímenes dictatoriales. La asistencia se caracterizaría por la utilización de modernas técnicas contrainsurgentes que fueron asesoradas y dirigidas por especialistas norteamericanos. Sin embargo, el despliegue masivo de ayuda militar no pudo evitar que se abriera una brecha irreparable en la hegemonía norteamericana en Centroamérica.

La victoria sandinista de julio de 1979 representó un nuevo hito en la historia del continente, y no sólo transformó radicalmente el desarrollo de la sociedad nicaragüense, sino que alteró la correlación de fuerzas a nivel regional y

continental y obligó al gobierno norteamericano a buscar nuevas respuestas frente a la situación novedosa e inesperada que se le presentaba.

En Somoza el imperialismo perdió al más fiel y eficiente servidor de sus intereses en Centroamérica y se vio compelido a readecuar su estrategia hacia la zona en un intento por fortalecer la supremacía que de pronto veía debilitarse. Al mismo tiempo, el triunfo del FSLN, cuyas hazañas político-militares recorrerían el mundo, constituía un peligroso ejemplo para los pueblos vecinos, sometidos a similares condiciones de miseria y represión. En el marco de estas circunstancias específicas comienza a delimitarse el papel que el imperialismo norteamericano asignó al territorio hondureño con la complicidad de la clase dominante y del gobierno locales.

Inmediatamente después del 19 de julio de 1979, los enviados del entonces presidente Carter, Viron Vaky y William Bowdler, comienzan a visitar la zona con una inusitada frecuencia. Aún no se habían cumplido dos meses de la victoria sandinista cuando se produjo el Informe Vaky ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, en septiembre de 1979, cuyo objetivo era la búsqueda de una solución urgente a la nueva situación que se presentaba para los Estados Unidos en el área como consecuencia de la victoria sandinista.

De su texto se desprende el temor que experimenta el gobierno norteamericano ante la Revolución. Refiriéndose a la nicaragüense, allí se manifiesta que “en vez de ayudar, puede afectar el futuro político de sus Vecinos” y agrega que “tanto para la América Latina como para Estados Unidos, Nicaragua representa actualmente un desafío crítico y una oportunidad de importancia. El curso de los hechos afectará la perspectiva de democracia en otras partes”.¹

Vaky hace referencia a lo que llama “zona norte”, representada por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que, según él, “tienden a ver el mundo a través de un lente diferente y sienten temores por la Revolución de Nicaragua y cuál será su impacto. La ansiedad por el porvenir tiene acongojados a estos gobiernos, que temen enfrentarse con una nueva ola de rebeldía”.²

En su análisis acerca de las condiciones internas de cada país, Vaky destaca que las de Honduras eran más favorables que en el resto de los países con respecto a los fines políticos que se perseguía. Estas se resumen en: ausencia de movimiento guerrillero y pocas posibilidades de su surgimiento, al menos en un plazo inmediato; existencia de un “régimen militar relativamente

¹ “Informe Vaky”. En El Día, 5 de marzo de 1980. México D.F.

² *Ibidem*.

benigno; un nivel favorable en la relación tierra-mano de obra y un sistema de distribución económica que ha evitado la polarización económica radical y las profundas diferencias entre ricos y pobres que se ven, por ejemplo, en El Salvador”.³

En sus recomendaciones acerca de la política a seguir en Honduras, Bowdler expresó que “es un hecho manifiesto que su ubicación geográfica [...] le da un papel clave en evitar que haya conflictos, incursiones y posibles infiltraciones regionales, tanto en una dirección como en otra, entre la Nicaragua revolucionaria y sus conservadores vecinos del norte [...] Así pues, Honduras es un país medular para el proceso de ‘tender puentes’ que esperamos surja en Centroamérica. Alentaremos a Honduras a que desempeñe ese cometido y alentaremos tanto a El Salvador como a Honduras para que zanden sin tardanza su disputa fronteriza. Al gobierno le proporcionaremos cooperación y asistencia a fin de ayudarlo a que alcance sus aspiraciones”.⁴

A partir de los enunciados del informe y de la política que de él se deriva, comenzaría una rápida delimitación y readecuación del papel de Honduras en la política regional. Para ello se imponía, en primer término, garantizar un nivel de estabilidad interno y una imagen pública para la cual resultaba inoperante la presencia de un General al frente del Estado. Se imponía buscar la fórmula de su sustitución por un civil. Al mismo tiempo, ambos objetivos —es decir, el de convertirse en muro de contención a la revolución en el área y el de ser estable internamente para poder desempeñar adecuadamente su actividad— requerían un enorme programa de militarización.

En este contexto se celebraron en abril de 1980 las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, en las que por una precaria ventaja de dos bancas el Partido Liberal obtuvo la victoria sobre su tradicional oponente, el Partido Nacional (conservador), habitual aliado del ejército. Quedaba así expedito el camino para el conveniente desplazamiento de los militares de la presidencia. Los comicios para elegir al Presidente de la República y el Congreso Nacional, en noviembre del siguiente año, afianzarían el ascenso liberal. De este modo, un médico, el Dr. Roberto Suazo Córdova, sustituyó en la primera magistratura al general Policarpo Paz García, colocado al frente del gobierno provisional con el apoyo de los propios liberales.

Tradicionalmente desligado de vínculos con los militares, católico practicante, devoto declarado de la patrona nacional, furibundo anticomunista y simpatizante confeso del *American Way of Life*, el nuevo Presidente constituía

³ Ibíd.

⁴ Ibíd.

la figura idónea para representar la imagen de democracia, moderación y estabilidad que se pretendía proyectar. Los acontecimientos posteriores se encargarían de desvirtuar rápidamente estas pretensiones.

LA ESTABILIDAD POLITICA INTERNA

Desde el momento en que los Estados Unidos comienzan a utilizar a Honduras para agredir a Nicaragua y al movimiento revolucionario salvadoreño, sabían que podían contar con el aliado que resultaba imprescindible para llevar a cabo sus planes: la clase dominante hondureña. Históricamente condicionada a la sumisión al capital norteamericano, esta clase contempla su alianza y las dádivas que de ella pueda recibir como la única posibilidad de mantenerse en el poder.

Temerosa de que pudiera reproducirse en Honduras una situación de erupción revolucionaria similar a la de sus vecinos, la burguesía no solamente acepta, sino que favorece el nuevo eslabón de la dependencia. Formados en su mayoría en escuelas norteamericanas, en el espíritu del anticomunismo acérrimo y los postulados de la doctrina de seguridad nacional, los militares adoptaron una postura similar. Ambos veían en la coyuntura que se les presentaba la posibilidad de recibir una cuantiosa ayuda económica en la que, pensaban, estaba la posibilidad de superar la crisis económica y social.

La debilidad de la clase dominante y la incapacidad de su sector dirigente explican que el gobierno haya sido capaz de insinuar desvergonzadamente regalar al país y convertirlo en otro Puerto Rico o en otra Corea del Sur. En el informe del gobierno a la Comisión Kissinger, en el que se mendigan diez mil millones de dólares, se planteó: “Si América permite a corto plazo la consolidación del sistema comunista en Nicaragua [...] el largo plazo es incierto para el Estado democrático de Honduras. La subsistencia democrática de Honduras a largo plazo con un gobierno marxista consolidado en Nicaragua solamente sería factible como un Estado asociado a Estados Unidos [...] o la presencia indefinida de tropas estacionadas de Estados Unidos en el suelo hondureño [...] ambas situaciones no son compatibles con la idiosincrasia hondureña.”⁵

Posteriormente en el resumen del documento se eliminó lo relativo a la “incompatibilidad” y se planteó: “El concepto de nuestro Consejo de Seguridad Nacional es que puede Concertar un tratado bilateral de defensa

⁵ Documento presentado a la comisión Bipartidista del gobierno de los Estados Unidos, presidida por el Dr Henry Kissinger, 14 de octubre de 1983, Tegucigalpa, Honduras

mutua con los Estados Unidos de América, similar al acuerdo de los Estados Unidos con Corea del Sur”⁶.

Los representantes de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), mucho más descarnados en sus planteamientos, se reunieron con un representante de Kissinger, Rudolph Peterse, a quien le expresaron que

En los momentos actuales se imponía una solución de carácter militar para derrocar al gobierno sandinista y ello es una condición *sine qua non* para probar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de proteger esta zona estratégica, así como poder tener la oportunidad de atender los problemas de mediano y largo plazo de la región, cosa que definitivamente no se podría lograr con un gobierno comunista entronizado en el corazón de Centroamérica. En resumen, la recomendación del grupo es que el momento inmediato requiere una solución eminentemente militar, que pudiese ser cubierta adecuadamente en su contexto político internacional con una acción concertada de la Organización de Estados Americanos, que era urgente que las acciones en este sentido se tomara en un tiempo perentorio no mayor de tres a seis meses antes de que se consolide el régimen sandinista o que comience la campaña presidencial en los Estados Unidos. Finalmente, que sólo si se resolviera el problema del carácter de Nicaragua, podría hablarse con algún sentido respecto a las otras políticas para el desarrollo económico y social de la región⁷

Los textos citados permiten ejemplificar en lo concreto la actitud entreguista y el carácter ultrarreaccionario de la burguesía hondureña. Sus contenidos constituyen el argumento que la burguesía utiliza para justificar su conducta. De su lectura se deriva su meta suprema: salvar su posición de clase dominante, aunque para ello tenga que hacer dejación de los más elementales principios de la dignidad nacional.

La solución militar, en la que coinciden clase dominante e imperialismo, implicaba necesariamente el reforzamiento del ejército hondureño y de la presencia militar norteamericana. Los militares, que desde 1963 fueron ocupando paulatinamente posiciones en el aparato administrativo, ven

⁶ “Resumen ejecutivo del documento presentado a la comisión bipartidista del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, presidida por el Dr. Henry Kissinger, por parte del gobierno de la República de Honduras”. Reproducido por Gregorio Selser en Honduras ocupada: Suazo ofrece a Kissinger hacer de su país un protectorado o un Estado libre asociado. Ed. ASACS, México, 1983

⁷ “Memorandum confidencial enviado por la secretaría Ejecutiva de APROH al general Gustavo Álvarez y al ingeniero Miguel Facusse”. Citado en Honduras en los años 80, INSEH, México, 1984.

asegurada su posición por el apoyo político que les brinda la burguesía y por el enorme caudal de ayuda proveniente de los Estados Unidos. Se harán omnipresentes a partir del ascenso de Suazo Córdova, bajo cuyo gobierno devendría la implantación de un modelo de seguridad nacional que combina la llamada democracia representativa encabezada por un civil con una férrea represión. En virtud de este modelo se instalará una militarización de la sociedad que pondrá íntegramente al servicio de la defensa interna y externa todos los recursos estatales.

La alianza entre el gobierno civil de los liberales y el ejército fue prevista desde la concepción misma del nuevo régimen. Con sólo 48 horas de antelación a la elección de Suazo Córdova, el Congreso designó jefe de las fuerzas armadas al entonces coronel Gustavo Álvarez Martínez.

Desde un inicio se estableció una estrecha coordinación entre estos dos personajes y el embajador norteamericano, en un trinomio cuyo orden jerárquico era el siguiente: en primer término el embajador Negroponte, orientador de la política, la economía y la estrategia; en segundo, Álvarez Martínez, encargado de la ejecución de estas orientaciones; en tercero, el presidente Suazo Córdova, cuya función consistirá en presentar que, efectivamente, en Honduras existe un gobierno democrático encabezado por un civil.

Representante del sector más reaccionario dentro del ejército. Álvarez Martínez era una especie de niño mimado del Pentágono. Había sido formado en escuelas estadounidenses y argentinas, en las que fue alumno aventajado, y el imperialismo lo consideraba uno de los mejores militares del continente. Desde los inicios de su gestión trabajó coordinadamente con Negroponte y con los asesores norteamericanos.

El militar hondureño asimiló la teoría de seguridad nacional que le fue, inculcada durante su estancia en el extranjero, junto con métodos de tortura y de exterminio. En sus discursos era frecuente la utilización de términos tan manidos como la “lucha contra el comunismo internacional”, la existencia de un “enemigo común” continental y la necesidad de luchar contra el “enemigo interno” que desde el seno de la sociedad atenta contra su integridad. A los pocos meses de su ascenso a la jefatura militar, Álvarez declaraba: “estamos en una guerra en que nuestras fronteras físicas no están en peligro, pero están en peligro la democracia, nuestra tranquilidad, modo de vida y fe religiosa, y debemos unirnos para defendernos”⁸

⁸ “Declaraciones de Gustavo Álvarez Martínez el 8 de junio de 1982”. Publicadas en un boletín mimeografiado.

En este planteamiento se encuentra, por una parte, la base teórica que se esgrime para justificar la represión contra el movimiento popular hondureño y, por otra, su complicidad con el régimen salvadoreño y con los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Se trata, en fin, de la justificación a una política contrainsurgente de claro perfil terrorista encaminada a desarticular a las organizaciones populares que internamente encaucen el descontento de las masas, así como a garantizar el papel de Honduras como plataforma contrainsurgente en Centroamérica.

Para favorecer a Álvarez Martínez, en el mes de abril de 1982 Suazo propuso al Congreso su ascenso a General de Brigada. Para ello tuvo que modificar el reglamento de ascensos, que estipulaba determinado número de años en un grado para poder transitar al otro. A partir de este momento, y con inusitada avidez, el recién nombrado General fue ampliando su poder y las facultades del organismo que dirigía. Posteriormente se modificó la Constitución aprobada en 1981 para transferir a su persona el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que hasta ese momento recaía sobre el Ejecutivo. Amparado en su fuerza, Álvarez comenzó a actuar al margen del Congreso, sin cuya aprobación aceptó una condecoración del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La más escandalosa de estas evidencias fue la negociación para establecer la base de Puerto Castilla y la firma del anexo al tratado militar suscrito con los Estados Unidos en 1954. El documento entró en vigencia al día siguiente de haber sido presentado por Negroponte. Solamente un año más tarde, cuando ya era un hecho consumado, fue consultado el máximo órgano legislativo. La única oposición provino de la representación del Partido de Innovación Nacional y Unidad (PINU), mientras que el delegado de la Democracia Cristiana se abstuvo.

El documento en cuestión hacía referencia a los aeropuertos de La Mesa, Palmerola y Golosón, pero no mencionaba Puerto Castilla, donde se estableció el Centro Regional de Entrenamiento Militar y Seguridad (CREMS) y posteriormente la base militar. Además de representar una irregularidad desde el punto de vista constitucional, el hecho adquirió un matiz doblemente escandaloso, porque la noticia se hizo pública en los Estados Unidos, mientras que las autoridades hondureñas trataban de mantenerla en secreto. En una demostración de fuerza, los propios militares la dieron a conocer. Por último, el canciller Edgardo Paz Barnica aludió al centro de entrenamiento como si se tratara de una institución académica, mientras que el jefe de la migración, Coronel Sánchez, se refirió a los boinas verdes que lo dirigen tratándolos de “expertos”; es decir, de simples técnicos.

Al analizar la relevancia de militares y del propio Álvarez en la política hondureña, un factor de suma importancia es la fundación de la Asociación

para el Progreso de Honduras (APROH) a inicios de 1983, en cuya presidencia aún permanece. Esta organización representa un ambicioso proyecto de consolidación de la burguesía hondureña, que patentizará su participación en el poder político. Se trata de una agrupación suprapartidaria, con personalidad jurídica, que abarca elementos de diversas procedencia comprometidos con la política norteamericana. El Comandante en Jefe de las fuerzas armadas desempeñó por este medio el doble de papel de jerarca militar y de cabeza del proyecto político y económico de la clase burguesa.

El proceso de militarización operado en el país tiene varias secuelas. La principal de ellas es la ocupación de Honduras por tropas norteamericanas para agredir a terceros países. Esto, unido a la dimensión omnimoda que asumen las fuerzas armadas como institución, nos conduce a la afirmación de que las mismas detentan el poder real. El gobierno civil se convierte en una simple formalidad propagandística. La conducta del Presidente y del Congreso dominado por los liberales se limita a refrendar la actuación del ejército.

Hacia finales de 1983 se produjo un nuevo paso en la trayectoria de Álvarez, cuando el Congreso aprobó su ascenso a General de División. Paralelamente, durante su meteórica carrera la propaganda oficial “vendió” su figura. No resulta por ello causal que halla asumido también la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol, el deporte nacional hondureño.

En este período el ya maltrecho sistema de democracia burguesa en Honduras sufre un nuevo golpe cuando el Congreso traspasa al Presidente muchas de las facultades que le son inherentes, durante el período de un año, bajo el pretexto de la crítica situación interna.

Al menos aparentemente, Álvarez Martínez se encontraba en la cima del poder cuando se produjo su sorpresiva destitución en marzo de 1984. Muchas han sido y son las conjeturas que se han levantado en torno a este hecho, pero independientemente del nivel de veracidad o de fantasía empleado en el análisis, existen razonamientos que se desprenden de la lógica de la información a nuestro alcance.

En primer término, habría que señalar que resulta imposible que los mecanismos impuestos para llevar a cabo forzosamente el ascenso de Álvarez, violando todos los procedimientos establecidos por la ley orgánica de las fuerzas armadas, no produjeran descontentos en el seno de la institución y el rechazo a la figura del militar ascendido. Las purgas efectuadas confirman esta hipótesis. A ello debemos añadir el hecho de que el ejército hondureño nunca ha sido un organismo monolítico y que históricamente en su seno se han delimitado tendencias un poco más moderadas.

Habría que considerar además que a partir de la guerra con El Salvador (en la que, como se sabe, Honduras resultó perdedora frente a la superioridad del

ejército de aquel país) se gestó un profundo sentimiento de revancha contra los militares salvadoreños. El tratado de paz impuesto once años más tarde no podía borrar de un plumazo esta situación. La presencia de miles de soldados salvadoreños entrenados y armados en Honduras no puede ser del todo aceptada en el seno del organismo armado. Desde la óptica de muchos oficiales y soldados, se trata de un ejército enemigo que circula libremente dentro del territorio nacional. La mejor muestra de esta contradicción son las divergencias surgidas en torno a la proporción de soldados salvadoreños y hondureños que se entregan en el CREMS.

Otro elemento que se maneja es que Álvarez era un hombre profundamente obsesionado por la idea de ser la guerra. Su anticomunismo y su afán de grandeza podría haberlo llevado a emprender un ataque contra Nicaragua en un momento en que no resultara oportuno a los intereses de Washington.

La posición de Álvarez al frente de APROH, su acento meteórico, el halo con que la propaganda oficial rodeó su figura, evidencia que este desmedido afán de poder se encaminaba claramente a la obtención de la máxima magistratura. Esta aspiración, que contaba con el apoyo del grupo empresarial, no podía ser bien vista por los Estados Unidos, puesto que ponía en peligro el modelo “democrático” implantado.

No obstante, al margen de todas las consideraciones que se puedan elaborar, se destaca un hecho fundamental: la salida de Álvarez no implicó ni podía implicar cambio alguno en el papel que desempeña Honduras en Centroamérica ni en la política de los Estados Unidos hacia el país y la región. Álvarez fue sustituido por Walter López, el oficial de más alta graduación de las fuerzas armadas. López era el Comandante de la Fuerza Aérea, la más importante de las armas del ejército hondureño, por ser la más antigua, la que posee mayores recursos y la más organizada. Sobrino del expresidente Osvaldo López y “compadre” de Suazo Córdova, el nuevo jefe militar tiene en su aval el ser considerado uno de los “héroes” de la guerra de 1969.

Profesionalmente calificado de capaz, al igual que su predecesor se formó en escuelas militares estadounidenses, en una de cuyas bases fue instructor. Conoce además el manejo de diecinueve tipos diferentes de aviones. En cambio, desde el punto de vista político no posee la habilidad de Álvarez y se le tilda de mediocre.

Las diferencias que pudiera derivarse de la jefatura de uno y otro personaje al frente de las fuerzas armadas constituyen sólo cuestión de matices. Pero aun cuando se produjera el hipotético caso de que diferencias más sustanciales fueran patentes, esto tampoco implicaría alteración alguna en la actual situación. La participación de Honduras en la política norteamericana hacia el istmo se ha implementado a través de mecanismos que van mucho más allá de

la voluntad de cualesquiera de los personajes de su escenario político. La dependencia económica y política, la acentuada por la función militar que se le asignó al país, impediría cualquier tipo de actuación de otras fuerzas más moderadas que lo intentaran conducir hacia una posición neutral.

Cualquier duda que hubiera podido surgir con respecto a la defenestración de Álvarez quedó disipada cuando el embajador norteamericano la avaló pocas horas después de producirse, en un discurso televisado que precedió al del propio Presidente. El inicio de las maniobras “Granadero I”, dos días más tarde, resultó la más clara evidencia de que en efecto nada había cambiado. El precio de esta estabilidad política interna ha sido el aumento gradual de la represión y el terror. Durante su campaña electoral, y después de su arribo al poder, Suazo no cesó de autoproclamarse partidario furibundo de la paz. Al abrigo de una pretendida imagen de constitucionalidad y pacifismo en Honduras se está desarrollando una política represiva cuyo objetivo es impedir las luchas populares y el apoyo al movimiento revolucionario de otros pueblos de la zona.

La represión se ha oficializado mediante la adopción de medidas legales. La primera de ellas fue la aprobación en 1982 de un decreto-ley antiterrorista en virtud del cual la toma de tierras de edificios públicos y de escuelas, las huelgas y cualquier otra acción de protesta popular son considerados actos contra la seguridad del Estado y castigados con fuertes sanciones carcelarias. En 1983 se reformó el código penal para fijar penas de cuatro años de prisión a los campesinos que ocuparan tierras.

El gobierno ha incrementado sustancialmente la represión, cuya 'tónica de violencia y la forma en que se han ido implementando mucho nos recuerda al gobierno democrático del civil Mario Méndez Montenegro en Guatemala, iniciador de la política de terrorismo de Estado en ese país, que coincidió también con un intento aperturista de inspiración norteamericana que es en muchos aspectos muy similar al que se intenta practicar actualmente en Honduras.

Persecución, encarcelamiento, tortura a líderes sindicales y estudiantiles; la existencia de cárceles y cementerios clandestinos; el surgimiento de grupos paramilitares; los desmanes de los cuerpos armados regulares y la ineffectividad del sistema jurídico vigente, constituyen los rasgos distintivos de esta situación que se perfila cada vez más hacia la implantación de un sistema de terror organizado.

El entonces jefe del ejército, Gustavo Álvarez, expresó en 1982 que las fuerzas armadas eran las defensoras de la democracia y que se oponían al terror, y las proclamó partidarias de la libertad de creencias, de reunión y de expresión. Al mismo tiempo rechazaba el ateísmo, la subversión, el marxismo

y las huelgas no justificadas, entre otras cosas. Este discurso, en apariencia contradictorio, tenía el doble propósito de crear un manto ideológico adecuado a la representatividad democrática que se aspiraba reflejar y al mismo tiempo justificar cualquier medida que se adoptara para protegerlo.

Desde 1981 se comenzaron a producir desapariciones de ciudadanos hondureños y de extranjeros. A fines de ese año en los alrededores de Tegucigalpa se descubrieron tres cementerios clandestinos. Para esa fecha las personas apresadas por grupos armados oficiales y paramilitares cuyo paradero se desconocía ascendían a alrededor de cuarenta. Este proceso continúa hasta la actualidad, agravado por el asesinato en plena vía pública de activistas populares. Los refugiados salvadoreños, que se suman por miles en Honduras, han sufrido especialmente la saña represiva. Su situación se hizo más crítica debido a las acciones del ejército de su propio país, que penetra libremente en el territorio hondureño hasta los campamentos donde se encuentran ubicados. A ello se añade el hecho de que están siendo trasladados hacia el interior del país para alejarlos del territorio salvadoreño y tratar por este medio de evitar cualquier posible contacto con los patriotas insurrectos. Como es típico en todo gobierno contrainsurgente, se han puesto en ejecución métodos destinados a sembrar el terror entre la población con el objetivo de paralizar a la oposición. Entre ellos figura la integración de los “Comités de Defensa Civil”, cuya función consiste en denunciar a cualquier posible sospechoso de subversión. Otra de las medidas es la creación del “Centro de Información y Emergencia” (CIE): un servicio telefónico mediante el que se pueden formular acusaciones de conspiración, de manera anónima, contra cualquier ciudadano.

Otros métodos de terror consisten en tratar de quebrar a los sindicatos asesinando a sus líderes y sustituyéndolos por elementos cooptados entre las filas de los trabajadores mediante un previo trabajo de ideologización que se acompaña del suministro de dinero. De este modo, se trabaja para tratar de mediatizar el movimiento obrero, hacerlo manipulable a través de sus dirigentes y brindar la imagen de que existe una comunicación entre el gobierno y la masa obrera. Cuando este objetivo no se logra, se apela a la represión abierta mediante los conocidos expedientes de asesinato o desaparición.

La represión, que institucionalizó sus mecanismos a Suazo, se extiende cada vez más. Los registros de barrios enteros, la presencia del ejército en lugares son los rasgos que definen la situación. Los jóvenes el ejército de forma compulsiva y aparatosa. Muchos de los que han tratado de escapar han sido asesinados a mansalva.

La anunciada política “constitucionalista” y pacifista del gobierno liberal es desarrollada de acuerdo a los cánones de la doctrina de seguridad nacional y sustentada sobre la jugosa asistencia militar suministrada por los Estados Unidos. El Presidente hondureño se autoerige “edecán de la paz continental”, gestiona la entrega del país a los yanquis y se pone al servicio de sus planes represivos a nivel regional. Para ello cuenta con el apoyo del poder judicial, del Congreso, del gobierno y de parte del Partido Liberal.

En su mensaje de año nuevo en 1983, Suazo denunció la existencia de una “conjura internacional” contra el “ejemplo de democracia” representado por su gobierno y se manifestó respetuoso del sistema político e ideologías de otros Estados. La realidad demostró que se convirtió, a nivel regional, en el sustituto de Somoza que necesitaba el imperialismo, e internamente en un represor que no tiene nada que envidiar a cualquier títere del continente.

La debilidad y la principal contradicción del modelo impuesto por Washington radica precisamente en este hecho: la constitucionalidad y la estabilidad que debían ser la base del; sistema sólo han podido lograrse a costa del incremento creciente de la represión interna y del fortalecimiento del ejército.

El gobierno civil de los liberales sólo puede ser garantizados por los militares Y tiene como bandera principal la guerra que lleva a callo contra su propio pueblo y contra los pueblos vecinos.

CRISIS ECONÓMICA Y AYUDA

La sociedad hondureña atraviesa por uno de sus peores momentos. Las deformaciones estructurales inherentes al modelo del capitalismo subdesarrollado se agravan por su subordinación extrema al imperialismo norteamericano, tanto en el orden económico como político, en un momento en que este se encuentra en crisis.

A la desigual e injusta distribución de la riqueza en esa sociedad profundamente dividida en clases, se unen los problemas derivados del carácter fundamentalmente agrario de su economía, lo que la hace depender en extremo de los vaivenes del mercado mundial.

Después del período de relativo auge que medió a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1978, las tendencias críticas de la economía se agudizaron con una resultante de la crisis del capitalismo mundial, que afectó fundamentalmente a los países subdesarrollados, exportadores de materias primas y de alimentos. En Honduras esta repercusiones se vieron sensiblemente ampliadas debido a la situación de guerra imperante en Centroamérica, en la cual el país desempeña un papel fundamental. La profunda imbricación de la penetración económica y el sentimiento político a los Estados Unidos han aflorado con toda crudeza en un momento en que para

aquel ha resultado imprescindible que Honduras desempeñe un papel más activo en la región.

Hacia 1979 las estadísticas comenzaron a indicar las evidencias de la banca rota que se avecinaba. A partir de entonces comienza un franco descenso del PBI, que del 6,5% cayó bruscamente a un 2,9% en 1980 y se mantuvo en descenso hasta llegar a una tasa negativa de —0,3% en 1983.

El descenso del PIB por habitante muestra igualmente una violenta caída de casi un 12% en el mismo período, lo que equivale a un sensible deterioro del ingreso per cápita

Como consecuencia de la crisis mundial se produjo un deterioro en los términos de intercambio que se expresó, en primer en primer término, en la ausencia de suficientes mercados y en la baja de los precios de los productos tradicionales de exportación que constituyen la base de su economía. Entre 1980 y 1983 el deterioro de su valor corriente fue de un 14%, mientras que la relación de precios de intercambio lo hizo en un 11% en igual periodo. Los productos más afectados fueron la caña de azúcar que bajó un 60%-, el café, en un 30%, y la carne refrigerada en un 44%. También se perjudicaron el algodón, el tabaco y las maderas.

Esta devaluación en la cotización de los productos exportables determinó un descenso en la producción y consecuentemente en las exportaciones.

En lo que respecta solamente a las de productos no tradicionales al mercado centroamericano, la reducción fue de un 40%. Esta área fue la más afectada debido a los problemas de crisis económica y lucha militar. En lo que respecta al total de exportaciones, se habían reducido entre un 60 y un 75% al iniciarse 1983.

Simultáneamente se produjo un vertiginoso ascenso de los precios del petróleo y de los productos importados procedentes de países industrializados, fundamentalmente por la acción de las transnacionales que controlan su distribución en el país. Esto perjudicó sensiblemente a Honduras, cuyo principal socio comercial ha sido tradicionalmente los Estados Unidos. A ello se unió la política proteccionista adoptada por este país y la devaluación del dólar. Entre 1980 y 1983 la caída de las importaciones, como consecuencia de lo anterior, fue de alrededor de un 30%, lo cual incidió negativamente en la producción industrial, que depende en gran medida de las importaciones de materias primas.

Se produjo además una disminución de la formación de capital de un 34% entre 1980 y 1983; los gastos en inversión de maquinaria descendieron igualmente en 54,5% y la inversión real del gobierno en 1983 era inferior a la de 1980 en un 15%, mientras que la amortización de la deuda es superior a un 89%.

A partir de 1980 se produjo una inversión extranjera directa de solamente once millones de dólares, debido a que la inestabilidad política de la región y la crisis económica en Honduras han desestimulado a los inversionistas. La fuga de capitales, estimada en 600 millones de pesos a inicios en 1982, se consideraba superior a los mil millones al finalizar 1983.

El consumo del gobierno se amplió en un 18% entre 1979 y 1983, mientras que el privado lo hizo en un 5,4%. Esto resulta insignificante si se tiene en cuenta que durante estos años el crecimiento poblacional fue superior al 3% y si se consideran factores como la situación de empleo y subempleo imperantes, el descenso del PIB por habitante y del salario real.

El déficit del gasto público se hizo crítico entre 1979 y 1983. En ese período los ingresos crecieron solamente en 28,0. En cambio, los gastos lo hicieron en 108. En 1983 el déficit de la cuenta corriente del gobierno superó los 800 millones de dólares, a pesar de que al iniciarse la década tuvo un saldo positivo de 12,5 millones. Solamente en los tres años comprendidos entre 1980 y 1983 el déficit del gobierno creció 125 millones de dólares y pasó de 253 a 378 millones; es decir, se incrementó en un 49,4%. Hacia 1980 el déficit es cubierto en gran medida a través del financiamiento externo (un 54%), pero en 1983 la situación cambió totalmente y el financiamiento externo sólo representó el 35,9% del total. Los gastos totales aumentaron en un 21 % durante esos tres años, mientras que el presupuesto permaneció estático.

A partir de 1979 las estadísticas muestran una balanza comercial y de pagos crecientemente negativa que se hace más marcada al finalizar la cuenta corriente —331 millones en 1980 y 205 en 1983. A pesar de que en los últimos años se evidencian mejorías, esto ha sido el resultado de una violenta contracción en las importaciones (22,7%), que resulta negativa tanto para la producción como para el mercado interno.

A partir de 1978 el promedio anual de inversiones ha sido de apenas 8,7 millones de dólares, lo que explica en parte que el gobierno recurra irresponsablemente a las reservas monetarias internacionales y a los préstamos exteriores para tratar de compensar la balanza de pagos. Entre 1979 y 1983 la deuda superó los 100 600 millones, cuyo servicio de pago fue de 150 millones de 1983, equivalente a casi el 20% del valor de las exportaciones. Esto se expresa sólo a modo de ejemplo ilustrativo, pues el déficit de la balanza supera los 350 millones de dólares, por lo que las exportaciones resultan insuficientes para cubrir las importaciones. Como resultado de ello, entre 1980 y 1983 la pérdida de las reservas monetarias internacionales ha sido superior a los 200 millones de dólares.

Medidas emergentes adoptadas por el gobierno (consistentes en incremento de impuestos sobre las importaciones, la elevación de los servicios públicos y

congelamientos de salarios) han resultado a todas luces insuficientes para detener el déficit fiscal. A partir de 1982 se ha recurrido a la banca central, con lo cual se ha contribuido a agudizar el proceso inflacionario. La crisis imperante repercutió en la empresa privada, y se expresó en el cierre de empresas (65 sólo en 1982) y en el despido masivo de trabajadores. La situación de este sector es de tal gravedad que su recuperación se ha convertido en uno de los objetivos de la política propuesta por el gobierno para enfrentar el problema.

Además de las causales de orden estructural enumeradas y la repercusión de los factores externos, el hecho de que Honduras se haya convertido artificialmente y de manera precipitada en una gigantesca base militar norteamericana constituye un factor decisivo que viene a ahondar la crisis económica e impide la búsqueda de paliativos.

El proceso de militarización que se desarrolla se origina en el fracaso militar sufrido en la confrontación con El Salvador en 1969. Sin embargo, no es hasta el triunfo de la Revolución Sandinista que se profundiza y acelera como consecuencia del papel que desempeña el país dentro de los planes del imperialismo. Para poder convertirse en base de la contrarrevolución, además de la enorme cantidad de suministros bélicos que recibe de los Estados Unidos, Honduras se vio precisada a fortalecer su aparato militar, lo que ha repercutido en un desmedido aumento del presupuesto destinado a las fuerzas armadas. Entre 1979 y 1983 los gastos militares se incrementaron en un 100%, mientras la tasa de crecimiento del PIB, como hemos visto, se tornó negativa. Esto implica, además de un gasto enorme en armamentos, manutención, municiones y combustible, la sustracción de una cantidad apreciable de fuerza de trabajo en plena capacidad, de la actividad productiva, ya que el número de efectivos del ejército también se duplicó. A ello se debe sumar la corrupción imperante en la alta oficialidad del ejército y en la burocracia estatal, enriquecida al amparo del poder.

Los elementos señalados han convergido para provocar un estancamiento de la economía que podría resumirse como sigue: estancamiento de la producción, retraimiento de la inversión, balanza comercial y de pagos negativo, creciente deuda externa, bajas reservas monetarias internacionales, déficit fiscal, inflación, reducción del nivel de vida y desempleo. Conjugadas con el crecimiento de la población, estas condiciones se reflejan en su empobrecimiento y en el ahondamiento de las diferencias existentes en la distribución del ingreso.

EL GOBIERNO LIBERAL FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

A su llegada al poder en enero de 1982, Suazo Córdova se enfrentó al estancamiento económico y a la miseria popular. El gobierno trató de solucionarlos mediante un programa económico que sólo favorecía a las transnacionales y a los sectores dominantes asociados a ellas y que no ha hecho sino agravar la situación de los sectores económicamente más débiles. La consabida y peligrosa receta del financiamiento externo, única salida a la que puede apelar la clase dominante, ha sido la base de la política oficial cuya resultante inequívoca ha sido la profundización de la crisis.

El programa económico del gobierno liberal se basa en tres fuentes: los llamados *reaganomics*, que son las recomendaciones formuladas a Suazo por el, embajador norteamericano John Dimitri Negroponte, verdadero poder detrás de la silla presidencial; *el Memorandum* Facusse elaborado por la fracción burguesa representada en el gobierno, el cual se ajusta curiosamente a las primeras; y un pliego de peticiones formuladas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Las recomendaciones del diplomático norteamericano coinciden en sus lineamientos con las de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, cuyo trasfondo teórico obedece a principios de seguridad nacional y de guerra fría relacionados con la “contención del peligro comunista”. El acento del documento recae en la incentivación del sector privado, al que se le otorga primordial importancia. Su primer punto se refiere al establecimiento de una relación cercana con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este organismo, con la finalidad de contribuir a la política de estabilización financiera propuesta, que tenía como utópica meta aliviar el desajuste financiero recurriendo, entre otras, a medidas como la congelación de remuneraciones y vacantes, la reducción de compras y bienes y servicios no personales, la limitación de nuevos proyectos, la disminución de transferencias corrientes o de capital y la reforma de los impuestos aduaneros. El recetario propuesto por los reaganomics no constituye más que el establecimiento de las condiciones que el gobierno liberal debería cumplir a cambio de la ayuda económica, las cuales podrían resumirse en el sometimiento del país a los dictados del FMI y la solución de los problemas confrontados por las compañías transnacionales norteamericanas.⁹

⁹ “Sería nuestro deseo que durante 1982 pueda tomar ventaja de las facilidades del crédito petrolero ofrecidas por los gobiernos de México y Venezuela [...] Sabemos que eso implica llegar a un acuerdo con la Refinería Texaco en cuanto a precios y asuntos de refinamiento. Alentamos al nuevo gobierno de Honduras como prioridad básica que busque- negociar con la Texaco. [...] que permita a la refinería operar con una ganancia razonable; el fracaso de las instituciones financieras hondureñas y el trato dado a los inversionistas foráneos han complicado las relaciones con la banca

Otras medidas propuestas por el gobierno se encaminaban a obtener el autofinanciamiento de las empresas públicas descentralizadas a través del incremento a las tarifas de los servicios prestados: electricidad, agua, alcantarillado y servicios portuarios, a la dinamización del comercio con los países del área mediante la firma de acuerdos bilaterales, al fomento de las exportaciones y a un estricto control sobre las importaciones.

Se estableció además el congelamiento de los salarios de los trabajadores estatales y el estancamiento de los salarios mínimos nominales. Se trató de mantener a precios moderados los alimentos básicos —granos, leche, azúcar— y se estableció la meta de hacer descender el ritmo inflacionario, que en 1982 había crecido en casi un diez por ciento.

Con respecto a los inversionistas extranjeros, el documento de la Embajada propone reformar las regulaciones bancarias con miras a incrementar el ahorro e incentivar a los inversionistas hondureños y extranjeros, especialmente a estos últimos en lo que respecta a la industria turística.

Al mismo tiempo, plantea no crear nuevos incentivos a las industrias de sustitución de importaciones y gradualmente a los ya existentes.

El *Memorandum Facusse* no se aparta mucho de los lineamientos anteriores. Plantea dos sugerencias básicas para la reorganización económica del país: estimular la iniciativa privada como base del crecimiento y revisar la política tributaria para lograr la reducción del déficit del gobierno central e instituciones autónomas por medio de la disminución de los gastos corrientes. El documento defiende la necesidad de implementar una alianza con el FMI similar a la existente en Jamaica para atraer a los inversionistas.

El *Memorandum*, que constituye un reflejo fiel del carácter dependiente de la burguesía hondureña, confiesa impudicamente: “querramos aceptarlo o no, nuestros países, por su tamaño y por lo convulso del área centroamericana, tenderemos a estar dentro de los esquemas o ala protectora del Fondo Monetario Internacional”.¹⁰

El documento presentado por el COHEP, que coincide con los dos mencionados, hace recaer la responsabilidad de la crisis económica en el Estado por su intervención “desproporcionada” en actividades que, según su punto de vista, deberían estar en manos de la iniciativa privada.

Todos los documentos mencionados se encuentran incluidos en el Plan de Desarrollo el período 1983-86, aunque comenzaron a ser puestos en práctica desde 1982. La política de entrega al capital extranjero propuesta y la óptica

extranjera y han inhibido el flujo de créditos comerciales [...] nosotros sugerimos prontas consultas con los bancos para buscar una solución”. Citado por Marco Virgilio Carias en op. cit.

¹⁰ Citado por Marco Virgilio Cartas en op. cit.

del gobierno liberal de que sólo por medio de los préstamos y la “ayuda” se podría escapar del caos económico se encuentra en marcha acelerada. Hacia mediados de 1982 el nuevo Presidente viajó a Washington para exponer a Reagan el crítico estado del país y solicitar un préstamo por 500 millones de dólares. El resultado de la visita fue la obtención de más de 300 millones por parte de agencias internacionales y un financiamiento especial del FMI. Por su parte la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) también propuso un plan de medidas. Este es un grupo en el que están integrados los empresarios más ligados al capital extranjero, ministros, líderes sindicales mediatizados, Industriales, ejecutivos de los medios masivos de comunicación y los intelectuales al servicio de la burguesía. Su proyecto consistió en el Intento de sanear el déficit fiscal y las instituciones autónomas, renegociar la deuda externa. fomentar las exportaciones, favorecer la inversión extranjera y el establecimiento de industrias maquiladoras, devaluar la moneda y otras. En sus lineamientos básicos este proyecto coincide con los documentos básicos de la política económica oficial; es decir, la apertura al capital extranjero y al mercado nacional.

Los planes de ayuda económica propuestos y llevados a la práctica se encuentran estrechamente relacionados con la ayuda militar, como en el caso de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, en la que esta se contempla de forma declarada. Por otra parte, se debe tener en cuenta que en la formulación de la estrategia imperialista, el fortalecimiento económico obedece a objetivos de seguridad nacional más que a intereses de beneficio para determinado pueblo. En el caso de Honduras, lo que se ha tratado de evitar es que la bancarrota económica conduzca a una situación revolucionaria. De hecho, al ponerse incondicionalmente al servicio de los intereses de los Estados Unidos, la clase dominante hondureña cerró toda posible vía de salida a la crisis. El interés fundamental de los Estados Unidos consiste en destruir a la Revolución Nicaragüense y por ello subordinan cualquier otra consideración al logro de este objetivo.

A partir de la publicación del *Informe Kissinger* la óptica mecánica del análisis de los problemas centroamericanos, cuya responsabilidad se achacó al comunismo, adquirió un nuevo matiz, al aceptar que en su génesis existen causas que son de orden interno. Como consecuencia de la incorporación de esta visión la ayuda se va a encaminar, al menos teóricamente, a la promoción de reformas, aunque sin perder de vista los objetivos de la seguridad.

La ayuda, que se canaliza por diversas vías, ha aumentado en la misma medida en que se ha incrementado la participación de Honduras en los planes bélicos de Washington. La mayor evidencia de ello es que El Salvador y Honduras son precisamente los mayores beneficiarios de la misma.

En julio de 1983 Suazo dirige una carta a Reagan en la que mendiga créditos y 350 millones de dólares. Propone que empresarios Norteamericanos se ocupen de las empresas hondureñas en quiebra, cuyo valor representa alrededor de 400 millones de dólares.

Más que en ningún otro documento, el entreguismo de la clase dominante se evidenció en el informe presentado por el gobierno a la Comisión Kissinger en 1983. Diez mil millones de dólares pagaderos en un período de doce años es el precio propuesto para situar a Honduras en una posición similar a la de Corea del Sur.

No obstante, la política de ajuste seguida por el gobierno no arrojó los resultados esperados. Su consecuencia ha sido la agudización de la crisis, el aumento en la desigualdad de la distribución ingreso, la contracción del salario real y, en fin, el incremento de las condiciones de pobreza.

Muchas empresas estatales están al borde de la quiebra y tuvieron que recibir apoyo financiero para poder continuar sus operaciones. El gasto público no pudo ser contenido, en primer término por la creciente elevación del presupuesto que se destina a la militarización. Al mismo tiempo el descontento generado por la crisis económica y por la política de seguridad nacional origina una inestabilidad interna que sólo puede ser, contenida con el fortalecimiento del aparato represivo.

En 1983 el comercio sufrió una depresión aún mayor, a pesar de que se elevó el volumen promedio de las exportaciones; por razones de precio su valor no fue el esperado, lo que determinó que los ingresos corrientes estuvieran por debajo del nivel programado. Las reservas internacionales continuaron mostrando un saldo negativo.

El gobierno no resultó capaz de detener la inflación. Los precios al consumidor no sólo no pudieron mantenerse estables. sino que se elevaron casi al doble de lo previsto, al liberarse el control sobre veinticinco de ellos. El aumento del impuesto sobre la renta, la contracción del salario real y la imposibilidad de detener la elevación de la tasa de desempleo agravaron las ya difíciles condiciones de vida de la población y deterioraron su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. Paralelamente, el gobierno adoptó otras medidas negativas para el bienestar popular, como la reducción del presupuesto de obras públicas y de beneficio social (incluidas la salud y la educación) en un país en el que la situación en estas esferas resulta notablemente precaria.

A fines de 1983 se aprobó la “Ley de Emergencia para Reactivar la Economía Nacional”, que establecía un conjunto de disposiciones extraordinarias en un intento desesperado que trataba de salvar la situación. El decreto, que comienza señalando que “nuestro país atraviesa en este momento la peor crisis

económica de su historia”, se propuso nuevamente las mismas metas que había trazado el gobierno liberal en los inicios de su gestión: reducir el déficit fiscal, elevar el empleo, cubrir el atraso en las deudas impulsar la producción agropecuaria e industrial, aumentar e incentivar la inversión privada y extranjera, detener la fuga de capitales, las exportaciones y, en fin, tratar de reanimar la anémica economía nacional. Hasta el momento, nada se ha logrado.

LA GUERRA DE REAGAN

La política norteamericana hacia Centroamérica, delineada en los finales de la administración Carter, fue ejecutada por su sucesor presidencial en una tónica acorde a la violencia de los planteamientos de su política exterior, calificada de “instrumento por el cual los pueblos aseguran su supervivencia en un mundo hostil”. Retomando los viejos enunciados de la política de “guerra fría”, se sitúa nuevamente esta posibilidad “supervivencia” sólo a partir del enfrentamiento con la URSS y de la necesidad de que los Estados Unidos, como contrapartida, “sean y actúen como una potencia de primer orden”. De acuerdo con esta óptica, los estrategas norteamericanos plantean combinar “su arsenal de armamentos con el poderío humano de las Américas” para hacer frente a la “agresión soviético-cubana” y expresan que “la situación real que enfrentan los gobiernos latinoamericanos que se encuentran bajo el ataque de grupos revolucionarios locales, asistidos por el ‘eje cubano-soviético’, no debe ser entendida como una amenaza a supuestas oligarquías, sino como una amenaza a los intereses de seguridad de Estados Unidos”.¹¹

Tres años más tarde el Informe Kissinger avalaba esos mismos principios, aunque con referencia específicamente a Centroamérica aceptaba que la crisis y el surgimiento de la revolución obedecen a causas de orden interno, sin dejar de enmarcar el fenómeno en la confrontación con la URSS, al señalar que “estas condiciones han sido explotadas por fuerzas externas, específicamente por Cuba, apoyada por la Unión Soviética y ahora operando por medio de Nicaragua”.¹²

En resumen, habría que destacar que desde la óptica imperialista, el eje de todos los conflictos que afectan a la región pasan por Cuba y por Nicaragua. La ejecución de la política imperialista estará condicionada por el hecho de no aceptar gobiernos considerados indóciles a los dictados de Washington. De acuerdo con esta percepción, la existencia de una Cuba socialista, achacada a la incapacidad de las administraciones anteriores, es un hecho que no debe

¹¹ “Documento de Santa Fe”. Serie Documentos no. 9, CEA, La Habana, 1983.

¹² Informe Kissinger. Publicado por La Nación Internacional, Costa Rica, 12-18 de enero de 1984.

repetirse. Para evitarlo, se llevará a cabo una intensificación del sistema de seguridad, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. En este marco cualquier movimiento popular que ponga en peligro la permanencia de un gobierno afín al de los Estados Unidos y afecte lo que considera su hegemonía en una región determinada, es valorado como un atentado contra lo que se denomina la “seguridad nacional” norteamericana. De acuerdo con estos principios, la respuesta a semejante situación no puede ser otra que la guerra en cualquiera de sus variantes.

La concepción de esta óptica guerrerista se ha puesto en evidencia en el, último quinquenio en la intervención directa en la guerra popular revolucionaria que se libra en El Salvador, en los intentos de desestabilización, las amenazas de agresión y el apoyo a grupos contrarrevolucionarios que actúan contra el gobierno sandinista, así como a través de los obstáculos y chantajes con que se ha querido neutralizar la labor negociadora del Grupo de Contadora.

La guerra que lleva a cabo Reagan en Centroamérica no es el resultado de los caprichos de un mandamiento venático y reaccionario. Su actuación obedece a lineamientos bien definidos de su política exterior, para la cual los únicos principios válidos son los que concuerden y contribuyan a la “grandeza” de los Estados Unidos, la que están dispuestos a mantener a cualquier precio.

LA ESTRATEGIA DE LA AGRESIÓN

La derrota sufrida en Vietnam condujo a los analistas del Pentágono a la conclusión de que se debió a la insuficiencia de los hombres y la tecnología empleados y a la lentitud con que fueron movilizadas las reservas. De ello infirieron que una futura victoria tendría que ser asegurada mediante la superación de estas deficiencias; es decir, una rápida y aplastante movilización de efectivos suficientemente armados. Un segundo aspecto que se deriva del anterior es el de la necesidad de asegurar el ágil y efectivo transporte de toda la tecnología militar. Esto sólo podría obtenerse con la ubicación de estos en lugares cercanos al teatro de operaciones, ya que un traslado por un barco desde los Estados Unidos resultaría demasiado lento. La existencia de bases militares bien pertrechadas con armamentos, equipos, combustibles y municiones, resulta vital en esa nueva concepción. Precisamente dentro de este aspecto específico debemos analizar el papel que desempeña Honduras en los planes de agresión a Nicaragua y al movimiento revolucionario salvadoreño.

Desde el punto de vista de su concepción operativa, la nueva estrategia intervencionista, conocida como de “reacción flexible”, fundamenta su accionar en la utilización de las llamadas “Fuerzas de Despliegue Rápido”

(FDR), cuyo objetivo es la neutralización de cualquier enemigo en un tiempo mínimo por medio de un ataque mínimo contundente. Con este fin está prevista la utilización del ejército, la aviación, la marina y los cuerpos de marines comandados por un Estado Mayor denominado “Fuerza de Trabajo Conjunto”. Un dato que nos indica la importancia concedida a estas fuerzas es el hecho de que dispusieron de un presupuesto de cinco mil millones de dólares durante un período de cinco años desde su creación a fines de 1979. Inicialmente dotadas de 80 000 efectivos, las FDR llegaron a estar integradas por 200 000 hombres con sus correspondientes medios de transportes y equipos.

Por las razones políticas y geográficas aludidas, Honduras se ha convertido en la base para la agresión que necesita el imperialismo en Centroamérica, pero no es el único apoyo. Para desarrollar sus planes, Reagan cuenta además con los gobiernos de Costa Rica, Guatemala y El Salvador. A través de ellos se llevan a cabo también ataques directos, como es el caso específico de Costa Rica, en cuyo territorio operan bandas antisandinistas. Estos países facilitan el tránsito de hombres y pertrechos destinados a los contrarrevolucionarios, políticamente adoptan posiciones a fines de las de Estados Unidos y contribuyen al aislamiento con que se pretende rodear al gobierno nicaragüense.

La estrategia imperialista solo puede ser puesta en práctica mediante un gigantesco aparato bélico. Para ello se envían grandes cantidades de armamentos y se les suministra asesoría a los regímenes del área, al mismo tiempo que se inicia un programa de militarización en Costa Rica. Una de las bases de la actividad desestabilizadora contra Nicaragua es el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios, que están integrados fundamentalmente por elementos somocistas que encontraron refugio en Honduras cuando se produjo su estampida en julio de 1979. El número de sus efectivos se calcula entre 6 000 y 12 000, y se encuentran ubicados fundamentalmente en campamentos de territorios hondureño, en especial en la zona fronteriza con Nicaragua, hasta cuyo territorio incursiona con fines criminales. Su actuación es de hecho la de un ejército mercenario. El pueblo hondureño ha repudiado la presencia de estas bandas de las que también ha sido víctima, hasta el punto de que varios cientos de familias que habitaban en la zona fronteriza se vieron obligadas a emigrar para huir de sus fechorías.

La firma del tratado de paz entre Honduras y El Salvador posibilitó la integración de la Comunidad Democrática Centroamericana (CDC), instrumento jurídico que legalizó el tránsito de tropas entre los distintos países del istmo —excepto Nicaragua, naturalmente— y la posibilidad de una intervención directa de tropas estadounidenses. El organismo, creado a

principios de 1982, vio fortalecido su papel intervencionista hacia mediados de ese año, tras el descrédito del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR) y la inoperancia de la OEA, puestos de manifiesto durante el conflicto de las Malvinas con su alineación a los Estados Unidos. En esa coyuntura no resultaba posible utilizar los mecanismos tradicionales de intervención y se dio la necesidad de centrar el ataque a Nicaragua a través de los gobiernos centroamericanos que son aliados incondicionales. A ello contribuyeron además condiciones internas imperantes en varios de los países en los que se buscaba apoyo para desarrollar su política agresiva, entre otros Argentina y Chile. En julio de 1982 la CDC recibió el apoyo “moral” del Congreso estadounidense con la aprobación de la “Enmienda Symms”, que concede facultades al Ejecutivo para destinar tropas a cualquier zona donde se considere en peligro los intereses norteamericanos.

En la práctica, existe una coordinación entre los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala, que no es más que el paso previo para la reintegración del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), desmembrado después de la caída de Somoza. Su más escandalosa evidencia es la participación de tropas hondureñas en los operativos que se desarrollan contra el FMLN en los departamentos fronterizos de Chalatenango y Morazán y el secuestro de dirigentes revolucionarios salvadoreños en Honduras.

EL APROVISIONAMIENTO BÉLICO

El aprovisionamiento bélico de Honduras se está efectuando de forma acelerada. Al igual que ocurre con la ayuda económica, el país resulta, después de El Salvador, el segundo beneficiario en el campo militar. No obstante, no resulta fácil determinar su monto exacto. En primer término, debido a que su suministro está previsto a través de diversos renglones Programa de Asistencia Militar, Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar, Fondo De Ayuda Económica, entre otras. Por otra parte, hay aspectos tales como la venta de armamentos a través de terceros países, los préstamos y las regalías, que no están contemplados en la ayuda. Las estadísticas muestran el aumento paulatino de todos los rubros suministrados por este concepto, cuyo subtotal para 1984 es reportado en 134 millones de dólares. Fuentes de la embajada norteamericana en Tegucigalpa citadas por la prensa¹³ hacen referencia a una ayuda total de 489 millones, de los cuales 153 corresponderían al aspecto militar.

Las maniobras militares conjuntas, muchos de cuyos implementos son posteriormente cedidos al gobierno, no se contabilizan bajo el rubro de ayuda,

¹³ Cfr. Granma, 31 de agosto de 1984.

como tampoco los armamentos cedidos en calidad de préstamos, gracias a los cuales el ejército hondureño se ha visto gratuitamente provisionado de helicópteros artillados, lanchas patrulleras, vehículos, equipos de comunicaciones, etc.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que aunque los Estados Unidos constituyen el principal abastecedor, no es el único, ya que también existen estrechas relaciones en el plano militar con Israel. Uno de los primeros pasos públicos en estas relaciones fue la venta, en 1980, de dieciocho aviones “Super Myster” adquiridos a un costo de cuatro millones de dólares cada uno. Este vínculo se afianzó con la visita realizada a Tegucigalpa por el ministro de Defensa Ariel Sharon en diciembre de 1982. Durante su estancia en Tegucigalpa fue suscrito un acuerdo militar que contempla la llegada de cincuenta asesores militares israelíes y armamento, por 25 millones de dólares, entre el que se encuentran doce aviones de combate “Kfir”.

Debido a la importancia estratégica que ha adquirido Honduras como base de agresión, se ha otorgado prioridad no sólo a la cantidad de armamentos y a su nivel de sofisticación, sino también a la construcción de obras de infraestructura logística.

Dentro de la estrategia diseñada, la aviación ocupa un lugar fundamental por la posibilidad que representa de llevar a cabo ataques aéreos y regresar rápidamente a la base de operaciones, y por su importancia en el traslado de tropas. Esta prioridad determinó que la administración norteamericana aprobara en 1982 un presupuesto de 21 millones de dólares para la construcción de tres modernas bases aéreas militares —la Ceiba, Mosquita y Palmerola— desde cuyas pistas pueden maniobrar los más modernos *jets* de la fuerza aérea norteamericana. Para el mes de abril de 1984 estas bases estaban ya en capacidad de admitir en una sola tarde la llegada de entre 15 000 y 20 000 hombres de la 82 División Aerotransportada.¹⁴ Se previó también la ampliación y mejoramiento de las pistas existentes con anterioridad, las cuales, sumadas con las anteriores, son once, y pueden recibir los aviones de transporte normalmente utilizados “C-130” y “C-SA”.

Este acelerado proceso de armamentismo se desarrolla al amparo de la cobertura legal que brinda el tratado de asistencia bilateral militar suscrito entre Honduras y los Estados Unidos en 1954. El documento, “desempolvado” por el embajador Negroponte, fue ampliado con un anexo que además de contemplar la entrega de la cuantiosa ayuda militar que se viene llevando a cabo, garantiza el libre tránsito de personal y de equipos norteamericanos en el territorio nacional.

¹⁴ Ricardo Córdoba y Lilia Bermúdez: op. cit., p. 24.

Otra instalación que ocupa un lugar prominente es el Centro Regional de Entrenamiento Militar y Seguridad (CREMS). Fue concebido originalmente para la preparación de 2 500 soldados salvadoreños. De este modo se encargan alrededor de 200 “boinas verdes”, procedentes del Primer Batallón del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de estas tropas, cuyo centro radica en Fort Bragg, Carolina del Norte. El centro se encuentra ubicado en el litoral Atlántico, entre la ciudad Trujillo y el Puerto Castrilla, lugar que posee excelentes condiciones geográficas y logísticas. Durante la Segunda Guerra Mundial el sitio había sido utilizado como primera base militar norteamericana en suelo hondureño. Su construcción se realizó a un costo de siete millones de dólares, ocupa un área de 200 manzanas y está dotado de medios de comunicaciones óptimos.

Entre los sofisticados equipos localizados en Honduras se destaca la instalación de un potente radar “AN/TPS-43” en el cerro de Hula, a veinte kilómetros de la capital. Valorado en cinco millones de dólares, este equipo lo maneja un grupo de cincuenta técnicos militares estadounidense y posee un alcance de 200 millas a la redonda, lo que significa que parte de los territorios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala quedan bajo su radio de acción.

Otro equipo similar está situado en la Isla del Tigre, en el estratégico Golfo de Fonseca, cuyas aguas bañan las costas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Allí opera un contingente integrados por miembros de la Segunda Fuerza Especial con sede en Carolina del Norte, y unidades de la Brigada de Fuerzas Especiales 193, acantonadas en Panamá. Según declaró el vocero de la embajada norteamericana en Tegucigalpa, Robert Callahan, el contingente tiene la misión de enlazar todas las instalaciones bélicas norteamericanas existentes en Honduras entre sí y con el Pentágono.¹⁵

LAS MANIOBRAS MILITARES

Dentro de los preparativos bélicos en Honduras, en los que el despliegue de la más avanzada técnica constituye una nota relevante, las maniobras y ejercicios militares ocupan un lugar importante. Sistemáticamente celebradas, las maniobras se caracterizan por su envergadura, extensión, frecuencias y números de efectivos que utilizan, y generalmente sobrepasan las dimensiones de los ejercicios convencionales tradicionales. Cumplen el triple propósito de tratar de intimidar a Nicaragua, de entrenar al ejército hondureño para la guerra convencional y de familiarizar a los militares norteamericanos con el escenario centroamericano. En otras palabras, practicar la utilización de sus fuerzas para una posible intervención directa. Desde la celebración de las

¹⁵ Granma, 31 de agosto de 1984

denominadas “Halcón Vista”, en octubre de 1981, hasta la fecha se han llevado a cabo ininterrumpidamente, de manera que siempre existe un movimiento militar de envergadura en el territorio hondureño o en sus inmediaciones. De acuerdo a declaraciones de voceros norteamericanos, existen planes de prolongarlas hasta 1988.

En febrero de 1983 la celebración de las maniobras Pino Grande I — conocidas también como “Ahuas Tara I”— se probó por primera vez en territorio centroamericano, la utilización de las Fuerzas de Despliegue Rápido. Movilizaron 4 000 soldados hondureños y 1 500 estadounidenses del Comando del Caribe. Su costo fue de 5,3 millones de dólares. Efectuadas a solo 16 kilómetros de la frontera nicaragüense, en momentos en que arreciaban los ataques de las bandas somocistas, resultaba más que claro el carácter intimidatorio que poseían.

Poco tiempo después tuvieron lugar las “Pino Grande II” o “Ahuas Tara II”, que se prolongaron desde agosto de 1983 hasta febrero del año siguiente.

En ellas participaron 16 unidades con un total de 6 000 soldados norteamericanos y 4 000 hondureños. Según los mandos de estos últimos, su objetivo era prepararse “frente a una eventual invasión extranjera del comunismo internacional”, El comandante general del ejercicio, coronel Schlossbert, declaró que serviría “para comprobar la capacidad de intervención rápida en cualquier país”.¹⁶

Entre el primero de abril y el 30 de junio de 1984 se realizaron las maniobras “Granadero I”, en las que participaron más de 3 000 soldados norteamericanos, incluidos “boinas verdes” y 250 paracaidistas de 82 División Aerotransportada que actuaron bajo la hipótesis de guerra de “entrar en un país que no conocemos y poder operar en él”.¹⁷

En el mes de marzo de 1984 se celebraron las “Alertas Emergencia”, con la actuación de 2 500 soldados norteamericanos cuyo teatro de operaciones fue la región hondureña fronteriza al departamento salvadoreño de Morazán, ya que su objetivo era intimidar al FMLN en los días en que se celebró la farsa electoral en ese país.

Entre el 23 de julio y el 8 de agosto se celebró la operación “Lempira”, que movilizó 500 soldados norteamericanos y 1 200 hondureños. Al iniciarse el último trimestre de 1984 continuaban los ejercicios bélicos denominados “Crown Dragonfly”, que comenzaron en septiembre con el desarrollo de simulacros de ataques aéreos en los que participaron ocho aviones norteamericanos “A-372”.

¹⁶ Uno más uno, México, 20 de agosto de 1983.

¹⁷ El Día, México, 14 de abril de 1984.

Paralelamente a las terrestres, han tenido lugar maniobras navales. La más espectacular de estas fue la que se inició con el desplazamiento del portaviones “Ranger”, el 21 de julio de 1983. Con la nave se movilizaron alrededor de 70 aviones caza-bombarderos con su correspondiente flotilla. Más tarde se desarrollaron otras maniobras en los océanos Pacífico y Atlántico; esta última con la participación de los portaviones “Coral Sea” y “New Jersey”. El 23 de agosto de ese año se iniciaron en el Atlántico occidental las maniobras “Readex”, en las que tomaron parte 32 naves de guerra norteamericanas, incluidos dos portaviones y el crucero nuclear “Mississippi”. Durante su ejecución se incorporaron dos naves británicas y una holandesa.

Posteriormente, en los días que siguieron a la invasión a Granada, a partir del primero de noviembre de 1983, se desarrollaron ejercicios navales en los que tomaron parte nueve buques de guerra. Al año siguiente, entre el 26 de abril y el 7 de mayo se hicieron en el Golfo de Fonseca los ejercicios navales “Vigilancia Costera”, en los que intervinieron fuerzas estadounidenses, hondureñas y salvadoreñas.

Entre el 20 de abril y el 6 de mayo se celebró la denominada “Ocean Venture 84”, considerada la más importante que se ha realizado en Centroamérica en los últimos tres años. Su objetivo fue la ejercitación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, y tomaron parte 32 000 efectivos que realizaron operaciones de desembarco, anfibia y paracaidismo. En ellas se demostró la gran capacidad operativa de las fuerzas desplegadas ante una posible intervención.

Del 30 de mayo al 26 de junio el Golfo de Fonseca fue nuevamente escenario de ejercicios, esta vez los “Guardianes del Golfo”, mientras que del 15 al 23 de julio, en ocasión del quinto aniversario de la Revolución Sandinista, se desarrollaron ejercicios aeronavales frente a la costa atlántica de Nicaragua. Otra manifestación del accionar militar imperialista que no constituye propiamente una maniobra, pero que obedece a fines similares, es la visita de buques de guerra a aguas territoriales centroamericanas. A principios de septiembre de 1984 el acorazado “Iowa” se estacionó frente al puerto de La Ceiba en la costa atlántica hondureña. El jefe de las Fuerzas Armadas, Walter López, realizó una visita a la nave en compañía de periodistas escogidos por la embajada norteamericana. Según fuentes de Washington recogidas por la prensa, el objetivo de la visita de la embarcación es “demostrar el interés militar de los Estados Unidos en Centroamérica”.¹⁸

¹⁸ Cfr. Granma. La Habana, 5 de septiembre de 1984.

Las maniobras y ejercicios enumerados demuestran que Honduras se encuentra, de hecho, ocupada por tropas norteamericanas. Durante la celebración de las “Pino Grande II” hubo 6 000 soldados yanquis en territorio hondureño. Existen además tropas permanentemente acantonadas en los aeropuertos militares y otros puntos claves. Su cifra aproximada es la siguiente: 700 en la base aérea de Palmerola, 100 en la Isla del Tigre, 50 en Sierra de La Mole, 150 en Puerto Castilla, 250 a cargo del espionaje aéreo. Existen además los técnicos encargados de operar los radares —50 por cada uno— y agentes de la CIA cuyo número no se puede determinar.¹⁹

Hasta el momento, los Estados Unidos han negado esta Información y el embajador Negroponte ha reconocido sólo la presencia de 300 asesores. Si a los soldados norteamericanos que circulan libremente por el territorio hondureño se añaden los cientos de somocistas que por su cantidad constituyen de hecho otro ejército dentro de Honduras, debe concluirse que ese país se encuentra en un estado de perenne ocupación por tropas extranjeras, ocupación que reviste la agravante de llevarse a cabo con la complacencia de las autoridades del país.

Al margen de la implicación política del hecho, la presencia de estos hombres significa una pesada carga para la depauperada economía del país y para el pueblo trabajador, sobre cuyas espaldas recae la manutención de este enorme cuerpo parásito.

La afirmación de que el país se ha convertido en la base militar de apoyo donde radica la infraestructura logística de las Fuerzas de Despliegue Rápido constituye una verdad insoslayable. Queda claro además que estas actividades son parte de los dispositivos para una invasión a los territorios de Nicaragua, de El Salvador, o de ambos a la vez, para lo cual los Estados Unidos han venido preparándose a partir de 1979. La sofisticación de los medios técnicos empleados; el entrenamiento a que son sometidas las tropas, que incluye el aprendizaje del idioma español; la preparación para el desembarco masivo de soldados por vía aérea en aeropuertos hondureños; la utilización de paracaidistas y la participación de las fuerzas navales, están encaminadas al logro de la saturación del teatro de operaciones en un tiempo record de acuerdo a la estrategia del despliegue rápido.

Los preparativos del imperialismo para la agresión, cada vez más intensos, fueron denunciados recientemente por el presidente electo de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, quien señaló que “el peligro de una intervención yanqui está más cercano que en cualquier otro tiempo.”²⁰

¹⁹ INSEH. Documento Especial. México. 10 de abril de 1984.

²⁰ Juventud Rebelde, La Habana, 11 de noviembre de 1984.

El dirigente expresó que las violaciones del espacio aéreo por aviones espías de los Estados Unidos, la penetración en aguas territoriales nicaragüenses de las naves de la marina yanqui, el hecho de que Nicaragua está siendo rodeada por barcos y aviones que cuentan con pistas en Honduras, y las maniobras militares que se anuncian y las que ya se ejecutan en el Atlántico y el Pacífico, son una evidencia de esto.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA AGRESIÓN IMPERIALISTA

El proceso de fortalecimiento militar que se viene desarrollando en Honduras resulta fundamental para los planes agresivos del imperialismo. En el plano interno tiene profunda repercusión el desarrollo y el papel que ocupan en la sociedad las fuerzas armadas. Estas adquieren una dimensión desproporcionada que se evidencia en los planos militar y político.

Desde el punto de vista militar se produce un aumento numérico superior a un 100% en la cantidad de sus efectivos, que pasaron de 14 240 en julio de 1979 a alrededor de 30 000 en 1983.²¹ Al mismo tiempo tiene lugar un incremento cualitativo y cuantitativo de su equipamiento e infraestructura logística: se moderniza el armamento; aumentan las unidades de transporte y de combate de la Fuerza Aérea, que es la rama priorizada; aumentan las bases, pistas de aterrizaje e instalaciones; surgen nuevas unidades de combate.²² El nivel de preparación técnica de sus cuadros de mando a todos los niveles se eleva.

En el plano político este proceso se traduce en un afianzamiento del papel desempeñado por los militares al frente del Estado. Aunque paradójicamente el gobierno esté encabezado por un civil, a partir de 1982 tiene lugar un acelerado proceso de militarización de la sociedad en el que obviamente las fuerzas armadas desempeñan la función protagónica. La implementación de la doctrina de seguridad nacional establece las bases para imponer un sistema de terror organizado que tiene como objetivo garantizar la actividad de Honduras a nivel regional. La connotación más sobresaliente de esta actuación es su carácter contrarrevolucionario, que se concreta en el desarrollo de tareas contrainsurgentes junto con el ejército salvadoreño y la íntima colaboración con las bandas somocistas.

²¹ Cifras tomadas del Documento Especial publicado por el INSEH, México, abril 10 de 1984. Publicaciones posteriores del propio INSEH se refieren a 11 000 soldados en 1979 y a 23 000 en 1984.

²² Entre otras, surge el Comando de Fuerzas Especiales, las Fuerzas Territoriales, las Brigadas de Infantería 101, 105 y 110.

EL MOVIMIENTO POPULAR

En Honduras existen tres centrales sindicales y varias organizaciones campesinas. Estas últimas se han destacado por las luchas emprendidas por la tierra, por la defensa de la soberanía y por los derechos humanos.

Esto se explica por el por ciento mayoritario de la población, que es rural, y por la existencia de diferencias sustanciales en la distribución de la tierra. En el campo la lucha de clases se expresa de manera violenta y son comunes las tomas de tierras. Las condiciones de vida del campesinado y el proletariado agrícola son por lo general peores que las del proletariado urbano. Entre otros factores, ello es consecuencia del proceso de crecimiento de los grandes latifundios a costa de los pequeños campesinos, que se arruinan y se ven obligados a vender sus parcelas o por razones coyunturales de mercado en las cuales algunos terratenientes extienden sus cultivos a costa de aquellos.

En las ciudades se destaca la actividad del Frente de Unidad Magisterial de Honduras, que ha sido blanco de la represión y de la actividad quintacolumnista de los llamados “frentes democráticos”.

Tradicionalmente los estudiantes universitarios han sido activos en la actividad opositora. La Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR) es la única organización que ha logrado mantenerse unida a pesar de la represión y de la actuación del actual Rector, miembro del APROH. Los estudiantes secundarios también han tenido una actuación relevante en los hechos de protesta por reivindicaciones propias y del pueblo en general. La extensión de la represión, especialmente a partir de 1982, golpeó al movimiento popular, cuya actividad disminuyó sensiblemente para comenzar a resurgir a partir de 1983. El Frente de Unidad Popular 25 de junio (FP-25), importante esfuerzo unitario realizado entre 1981 y 1982, fue desintegrado pero mantiene la publicación de un boletín.

En líneas generales, el movimiento popular, especialmente los campesinos organizados en el Frente de Unidad Nacional de Campesinos de Honduras (FUNACAMH), han manifestado su oposición a la política económica impuesta, a la represión y a los planes militares del imperialismo.

El movimiento revolucionario armado tuvo algunas expresiones entre 1979 y 1980 con el surgimiento de tres organizaciones: el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos —que luego formaron las Fuerzas Armadas Populares (FAP)—, el Movimiento Popular de Liberación Nacional Cinchoneros y las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya.

Las FAP fueron fuertemente golpeadas en 1983, cuando intentaban abrir un foco guerrillero en Olancho. El Movimiento Cinchoneros y las FPR Lorenzo Zelaya han desarrollado actividades en las que se ha hecho sentir su presencia.

La orientación de la lucha de estas organizaciones fue definida por ellas como popular revolucionaria y de liberación nacional.

En general las fuerzas revolucionarias se encuentran en la etapa de acumulación, previa a todo desarrollo regular de actividades. Aun cuando no están en una fase que les permita emprender acciones efectivas contra el sistema, no han dejado de hacer sentir su presencia combativa a través de diversas acciones. Aunque presenten en ocasiones un carácter esporádico o no alcancen los objetivos propuestos, estas acciones constituyen un índice altamente positivo de la potencialidad revolucionaria latente.

CONCLUSIONES

La extrema dependencia al imperialismo norteamericano que caracteriza a la clase dominante hondureña constituye una constante en su devenir histórico. Su origen data del período de inserción y afianzamiento del país en el mercado capitalista internacional, al que Honduras se integra mediante el enclave minero y bananero y no como consecuencia de la actividad de un grupo empresarial criollo.

El enclave, que desde entonces determinará el curso de la acumulación, adquirió en Honduras sus características clásicas. A través de su control de las actividades económicas fundamentales, se va a introducir en la esfera política, hasta llegar a dirigirla mediante el soborno y las presiones.

Lastrada por esta subordinación originaria, la burguesía hondureña se va a conformar como una clase débil cuya gestión se limitará en gran medida a garantizar el funcionamiento de los mecanismos de explotación de las riquezas naturales por parte del capital extranjero. Esta relación burguesía imperialismo atravesó por distintas etapas, pero mantuvo su esencia y caracteres fundamentales hasta nuestros días.

Hoy por hoy el país atraviesa una crisis económica que los propios funcionarios oficiales han calificado como “la peor de su historia”. Esto se origina en causas de orden estructural. La crisis se ha visto agravada por las repercusiones que la crisis general del capitalismo tiene en los países subdesarrollados.

En esta sociedad profundamente marcada por las diferencias de clase, las consecuencias de la crisis recaen fundamentalmente sobre la mayoría de la población, que vive en condiciones de miseria y para la cual no se vislumbra ninguna posibilidad de mejoría en los términos del sistema vigente.

Ante la situación de bancarrota, la clase dominante, otras salidas, apela al endeudamiento externo y ha al FMI. Lejos de representar una solución, este es un factor que viene a ahondar las determinaciones internas de la crisis.

A partir de 1979, año en que tiene lugar la victoria del Frente Sandinista de liberación Nacional, la situación de Honduras se agrava aún más como resultado de la política norteamericana hacia Centroamérica. Su objetivo es destruir a la Revolución Sandinista y al movimiento revolucionario de El Salvador y Guatemala para tratar de evitar el surgimiento de gobiernos que no se subordinen incondicionalmente a sus intereses.

Para la consecución de sus planes agresivos, el gobierno norteamericano necesita una base de apoyo en la región. En esa coyuntura, Honduras es el único país que reúne los requisitos para desempeñar ese papel: una aparente mayor estabilidad política, ausencia de movimiento guerrillero y ubicación geográfica idónea.

La burguesía y el ejército apoyaron incondicionalmente los planes norteamericanos, no sólo por estar ideológicamente condicionados, sino también porque vieron en esa enorme cantidad de recursos una, posibilidad de mantener su hegemonía.

Los militares hondureños, cuya presencia en la sociedad es una constante desde 1963, ven fortalecido su papel por medio de la implementación de los principios de la doctrina de seguridad nacional y por el gigantesco caudal de recursos que de manera acelerada comienzan a recibir. El incremento cuantitativo y cualitativo de sus medios técnicos y de sus efectivos se complementa con el desarrollo de una actividad militar inusitada a través de las maniobras militares navales, aéreas y anfibias que ininterrumpidamente tienen lugar desde 1981.

A partir de 1982 los militares Se convierten en el verdadero poder gobernante en Honduras. Serán ellos los que determinen, con el embajador norteamericano, la política interna y externa. Al margen de los mecanismos de la democracia representativa se establece un control absoluto de la sociedad, cuyas características son las de un régimen de terror estatal en el que la represión es la técnica dominante.

La presencia permanente de tropas norteamericanas en territorio hondureño, cuyo monto exacto superior a los 1 200 efectivos se desconoce, y la de los miles de guardias somocistas, cuyo centro de operaciones radica en Honduras, nos permite afirmar que el país se encuentra bajo la ocupación permanente de tropas extranjeras que circulan y actúan libremente dentro del territorio nacional. A ello se deben sumar los miles de soldados salvadoreños que reciben entrenamiento en el CREMS. Esta ocupación, que se lleva a cabo con la complacencia oficial, es otro de los factores que contribuye a gravar la ya maltrecha economía nacional.

El ejército hondureño desempeña un doble papel represivo: en lo interno contra el movimiento popular y a nivel regional contra la Revolución Nicaragüense y el movimiento guerrillero salvadoreño.

El resultado de la situación descrita es la existencia de una crisis social que la clase dominante no está capacitada para enfrentar. En razón de los mecanismos de dependencia y debido a la militarización de la sociedad, no existe un espacio político para la actuación de grupos centristas que estuvieran aptos para llevar a cabo un proyecto de desarrollo propio, o que al menos asumieran una postura neutral en defensa de sus intereses nacionales.

La situación de las grandes mayorías tiende a empeorar; los índices de pobreza aumentan y no se vislumbra la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Existe una explosiva situación que tiende a polarizarse cada vez más. Ella es el campo propicio para el desarrollo de acciones de protesta organizada que ya han tenido expresión concreta. A nivel político, el ejemplo que representa el triunfo sandinista y la beligerancia efectiva de los guerrilleros salvadoreños y del movimiento revolucionario guatemalteco tienen que influir necesariamente en un pueblo que sufre males similares a los que motivaron a aquellos a la rebeldía.

En un país en estado de ocupación permanente, abatido por la crisis y cuya burguesía tiene como meta convertirse en protectorado de un poder imperial, no puede existir la posibilidad de solucionar los problemas que afectan la nación. La clase que debería llevar a cabo esta tarea tiene como aspiración perder su precario carácter nacional. Esta empresa queda, pues, en manos del pueblo hondureño, para el cual el rescate de la soberanía y el establecimiento de un sistema más justo representa la única posibilidad de alcanzar una vida decorosa y digna.

TABLA No. 1

INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN HONDURAS
(en miles de dólares)

1907	1908	1914	1919	1924	1929	1936	1940	1943	1950
2,0	2,0	9,5	19,4	40,2	72,0	36,0	38,0	37,0	62,0

FUENTE: ONU: El financiamiento externo en América Latina. Citado por Juan Arancibia: Honduras: ¿un Estado nacional?, Ed. Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras. 1984.

TABLA No 2
Honduras: Asistencia Externa 1982. (Millones de Dólares)

Banco Mundial	216 000
Empresas venezolanas	80 000
Argentina	15 000
Agencia Canadiense para el Desarrollo	5 000
Fondo Monetario Internacional	95 000
Banco Interamericano de Desarrollo	54 000
Agencia Internacional para el Desarrollo	83 000

FUENTE: Datos tomados del Boletín Informativo de Honduras No. 16, 17 y 18. centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 1982, citado por Marco Virgilio carias, op. Cit.

TABLA No 3
TOTAL DE LA AYUDA ECONÓMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA CENTROAMÉRICA
(miles de dólares)

	1980	1981	1982	1983	1984	Total
Costa Rica	15 098	15 035	31 639	40 615	36 198	138 585
El Salvador	49 942	59 069	71 084	87 100	75 478	342 673
Guatemala	13 291	18 735	15 188	19 673	26 556	93 443
Honduras	52 627	38 548	43 879	45 561	46 182	226 797
Nicaragua	35 975	14 814	-	-	-	50 789
Panamá	2 104	10 489	13 044	11 316	11 932	48 885
Total	169 037	156 690	174 834	204 265	196 346	901 172

Incluye: Asistencia para el desarrollo (Agencia Internacional para el Desarrollo), cuerpos de paz y programa PL 480 (Alimentos para la paz)

FUENTE: U.S. Department of State, Congressional Presentation, Security Asistance Program, Fiscal Years

TABLA No 4
TOTAL DE LA AYUDA EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS PARA
HONDURAS
(miles de dólares)

	1960-1979	1980	1981	1982	Estimado 1983	Propuesto 1984
Programa de Asistencia Militar	6 615	11	-	11 000	27 500	40 000
Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar	8 469	441	535	1 275	800	1 000
Programas de Ventas Militares al Extranjero	12 500	3 530	8 400	19 000	10 000	-
Programas Militar y Acuerdos de Ventas de Construcción	9 659	5 045	4 332	9 388	15 000	50 000
Exportaciones comerciales aprobadas por el Acta de Control de Exportación de Armas	3 986	688	923	500	500	3 000
Fondo de asistencia Económica	-	-	-	36 800	15 000	40 000
Subtotal de Ayuda para la Seguridad	40 229	9883	14 190	77 963	68 800	134 000

Fuente: Departamento de Estado, citado por Ricardo Córdoba y Lilia Bermúdez, op. Cit

TABLA No 5
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DE LA DESOCUPACIÓN

Tasa de desocupación

Nacional	19,3	20,4	21,2
----------	------	------	------

Sector Agropecuario	...	35,5	36,9
---------------------	-----	------	------

Índices

Fuerza de trabajo	100,0	103,9	107,6
-------------------	-------	-------	-------

Ocupación	100,0	99,6	105,2
-----------	-------	------	-------

Desocupación	100,0	109,6	117,9
--------------	-------	-------	-------